

40.^a SESION ORDINARIA — SEPTIEMBRE 1.^o DE 1888

Presidencia del doctor PELLEGRINI

Ministro presente: de justicia, culto e instrucción pública.

Senadores presentes: Baltoré, Barros, Cambaceres, Dávila, de la Silva, del Valle, Derqui, Febre, Funes, Gil, Navarro, Nougués, Oliva, Ortega, Paz, Pizarro, Rodríguez (C. J.), Rodríguez (M. F.), Ruiz (H.), Ruiz (M.), Tello y Zapata.

Senador ausente, con licencia: Rocha.

Senadores ausentes, con aviso: Baibiené, Gollán, Mendoza, Moyano, Ortiz y Pérez.

SUMARIO

- 1.—Asuntos entrados.
- 2.—Moción del señor senador Pizarro, para que se ceda el recinto a la Cámara de Diputados, como lo solicita, después de terminada la discusión del proyecto de ley sobre matrimonio civil. Se apeneba.
- 3.—Asuntos entrados.
- 4.—Se concede licencia a los señores senadores Ortiz (M. S.) y Gollán.
- 5.—Se designa presidente de la República para el caso de acefalía al señor senador Cambaceres.
- 6.—Se consideran las modificaciones al despacho de la Comisión de Legislación en el proyecto de ley en revisión sobre matrimonio civil.

—En Buenos Aires, a primero de Septiembre de mil ochocientos ochenta y ocho, reunidos en su sala de sesiones el señor presidente y los señores senadores arriba inscriptos, se abrió la sesión con inasistencia de los señores senadores Baibiené, Gollán, Mendoza, Moyano, Ortiz y Pérez, con aviso; y con licencia, Rocha.

Leída y aprobada el acta de la anterior de 28 de Agosto (39.^a ordinaria), se da cuenta de los siguientes asuntos entrados:

1

Comunicaciones oficiales

Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo subvencionando con la segunda Exposición Internacional de Ganadería y Agricultura, que

tendrá lugar en 1890. A la Comisión del Interior.

—Proyecto de ley, en revisión, acordando pensión a la señora Matilde H. Miguens, hija del capitán de marina Tomás Haimon. A la Comisión de Guerra.

—El presidente de la Honorable Cámara de Diputados recaba el recinto de sesiones desde el lunes próximo, para celebrar sesiones diarias.

2

Sr. Pizarro. — Pido la palabra.

Yo creo, señor presidente, que el Senado debe tener en consideración, al resolver la solicitud de la Cámara de Diputados, que va a ocuparse de un asunto de la mayor trascendencia social, que justamente ocupa la opinión del país. No es posible que este asunto se trate en secreto y fuera del alcance de la responsabilidad social, que, como representantes del pueblo, tenemos para con éste, en la emisión del pensamiento y de la doctrina que haya de decidir de nuestros votos y de la resolución de la Cámara, en asunto tan importante como el que nos ocupará hoy, y, por consiguiente, el Senado no haría bien, a mi juicio, en privarse del recinto, cediéndolo para las sesiones diarias de la Cámara de Diputados, si esto pudiera ser un inconveniente para que asunto de importancia tanta se tratara de una manera excusada y como en privado, resolviéndolo en nuestra sala ordinaria o antecámara, donde se-

sionamos de una manera inconstitucional, a mi juicio, pero ya establecida por la práctica en casos análogos.

Yo he de votar por que el recinto se ceda para las sesiones diarias de la Cámara de Diputados, después que se haya terminado la discusión de este asunto.

—Apoyado.

Sr. Presidente. — El señor senador hace moción para que se conteste a la Honorable Cámara que se le cederá el recinto después de terminada la discusión del proyecto de ley de matrimonio civil.

No habiendo oposición, se contestará en esos términos.

3

—El presidente de la Cámara de Diputados comunica la sanción definitiva del proyecto de ley abriendo un crédito suplementario al inciso 3º, artículo 6º, del Departamento del Interior. Al archivo.

—El presidente de la Cámara de Diputados comunica la sanción definitiva del proyecto de ley acordando pensión a la señora Lubina Carril de Godoy. Al archivo.

Peticiones particulares

Don Pedro Banón, ex vista de aduana, jubilado, solicita permiso para residir por dos años fuera del país. A la Comisión de Peticiones.

—La pensionista militar doña Bernarda D. de Vega, solicita aumento de la pensión que actualmente goza. A la Comisión de Guerra.

—Los señores Rolando Sevacher y Compañía, proponen la construcción de una galería frente a la plaza Victoria, para lo que solicitan se les autorice a verificar la expropiación de los terrenos necesarios. A la Comisión del Interior.

—La pensionista militar doña Javiara Rodríguez solicita aumento de pensión. A la Comisión de Guerra.

—Los señores Balmaceda y Hughes hacen modificaciones en su propuesta de ferrocarril de Villa María a Reconquista, aprobado por la Cámara de Diputados. A la Comisión del Interior.

Despachos de Comisión

La Comisión del Interior se ha expedido en el proyecto de ley, en revisión, autorizando al Poder Ejecutivo para hacer practicar los estu-

dios necesarios para la canalización de los ríos Victoria y Gualaguay. A la orden del día.

La de Hacienda, en el proyecto de ley, en revisión, autorizando al Poder Ejecutivo para abonar a la señora Casiana Uriarte de García la cantidad de 4.000 pesos. A la orden del día.

En el proyecto de ley en revisión, por el que se abre un crédito suplementario al Departamento de Relaciones Exteriores por la cantidad de pesos 11.249,56. A la orden del día.

La de Peticiones, en el proyecto de ley en revisión, aumentando la pensión que disfruta la señora Carmen M. de Zuviría. A la orden del día.

En el proyecto de ley en revisión, acordando a las señoritas Nicasia y Luciana Martínez la pensión graciable de 80 pesos. A la orden del día.

En la solicitud del vicario general de la Catedral de Paraná, pidiendo subvención. A la orden del día.

4

La compañía Sociedad General Pobladora, propone modificaciones a su solicitud anterior, sobre construcción de un canal de cabotaje en el Riachuelo. A sus antecedentes.

—Los abajo firmados, en uso del derecho de petición, nos presentamos suplicando a vuestra honorabilidad se sirva no prestar su aprobación al proyecto de ley sobre el matrimonio civil, pendiente de su resolución. Siguen 27.603 firmas.

LICENCIA

El señor senador Miguel S. Ortiz solicita licencia para faltar el tiempo que resta del período de sesiones. Se acuerda sobre tablas.

—El señor senador Gollán solicita licencia para faltar a las sesiones por el término de veinte días. Se acuerda sobre tablas.

5

Sr. Presidente. — Se va a proceder a la elección para el caso de acefalía del presidente de la República.

—Se hace en esta forma:

Votan por el señor senador Cambaceres, los señores senadores: Baltoré, Barros, de la Silva, Derqui, Funes, Gil, Navarro, Nogués, Oliva, Ortega, Rodríguez (M. F.), Ruiz (H.), Ruiz (M.), Tello y Zapata: por el señor senador Paz, los señores senadores Febre y Pizarro y por el señor senador Rodríguez (J. C.), el señor senador Cambaceres.

Sr. Secretario. — Han obtenido: 16 votos el señor senador Cambaceres; 2 votos el señor senador Paz y 1 voto el señor senador Rodríguez (C. J.).

Sr. Presidente. — Queda electo el señor senador Cambaceres.

6

— Se lee:

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Legislación ha tomado en consideración el proyecto de ley, enviado por el Poder Ejecutivo con el mensaje de fecha 22 de Septiembre de 1887, reformando nuestra legislación sobre el matrimonio, y después de un detenido estudio del proyecto, tiene el honor de aconsejaros le prestéis vuestra aprobación con las siguientes modificaciones:

En el artículo 14: agregar después de escrito: *o verbalmente, en cuyo caso se levantará acta de la exposición.*

En el artículo 16: agregar después de solicitud: *o en el acto.*

El artículo 19, redactado así: Las actuaciones seguirán ante los jueces superiores del distrito o sección judicial de la novia.

Suprimir el artículo 20.

El artículo 21 modificado así: Terminado el expediente, el juez resolverá precisamente dentro de los tres días siguientes.

Suprimir el artículo 27.

En el artículo 77, suprimir lo siguiente: *el depósito de la mujer en casa honesta, dentro de los límites de su jurisdicción.*

El miembro informante os dará las razones de este dictamen.

Sala de comisiones, Agosto 21 de 1888.

Carlos Juan Rodríguez. — Miguel S. Ortiz.

El Poder Ejecutivo
de la
Nación Argentina
—

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1887.

Al Honorable Congreso de la Nación.

El creciente aumento de inmigración europea ha puesto de manifiesto la necesidad de reformar nuestra legislación sobre el matrimonio

El Código Civil sólo autoriza el matrimonio

religioso, celebrado en conformidad a sus disposiciones y según las leyes y ritos de la iglesia a que los contrayentes pertenezcan.

Muchos habitantes de la República, o no tienen en el país sacerdotes de la comunión a que pertenecen, para que bendigan su unión, o no profesan culto externo alguno, creyendo en Dios y adorándolo como autor de lo creado.

Los que se encuentran en estos casos no pueden casarse según nuestras leyes, quedando así privados del más precioso de los derechos del hombre: el de formar legalmente un hogar y una familia.

Entre los grandes propósitos de la Constitución nacional, es, sin duda, el mayor de todos «asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino.»

La Constitución, para hacer práctica esta hermosa promesa, autoriza a los habitantes de la Nación a profesar libremente su culto y casarse conforme a las leyes, reservando sólo a Dios las acciones que no ofendan al orden y la moral pública, ni perjudiquen a tercero.

Las leyes que reglamenten el matrimonio, deben inspirarse en el mismo espíritu liberal de la Constitución, para que sea una verdad la libertad de conciencia y la promesa hecha a «todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino.»

Aquellos que no puedan casarse con arreglo a las actuales disposiciones del Código Civil, por no haber en el país sacerdotes de su culto, y los que crean que no deben casarse así, se verán en la dura alternativa de traicionar su conciencia o de privarse del derecho de formar un hogar amparado por las leyes.

El matrimonio es, de todos los contratos, el que tiene más nobles y altos fines. Forma la familia, que es la base de la sociedad; crea derechos y obligaciones entre los cónyuges y entre éstos y sus hijos, que deben criarse y prepararse para la vida del ciudadano, al calor de un hogar legal.

No es posible, pues, que la ley civil preste por completo de la reglamentación de un contrato de tanta trascendencia social, y que lo entregue en absoluto a los ritos de las diversas religiones que existan en la República; tanto más, cuanto que, muchos de sus habitantes no profesan culto externo alguno. Es por ello que la mayor parte de las naciones más civilizadas han legislado sobre esta importante materia.

Pero esas leyes, ordenando que el matrimonio se celebre ante un funcionario civil, aunque permiten que después se lleve a cabo de confor-

midad al rito de la religión de los contrayentes, no respetan la libertad de la conciencia de los que sólo crean en la validez del matrimonio religioso.

Pueden, además, amparar una situación terrible para alguno de los contrayentes, principalmente para la mujer, que se case civilmente bajo la promesa de un inmediato matrimonio religioso, que el esposo rehuse después celebrar. Esa mujer, que no se cree casada, tiene sin embargo, que vivir como tal, sufriendo, mientras viva, las torturas de su conciencia.

El proyecto de reformas al Código Civil, que someto a vuestra deliberación, guarda perfecta conformidad con los preceptos de la Constitución nacional, y permite la celebración del matrimonio sin la menor violencia de la conciencia, cualesquiera que sean las creencias que se profese.

Probada la habilidad de los que quieran casarse, pueden celebrar su matrimonio de conformidad a los dictados de su conciencia; pero el casamiento no producirá efecto alguno civil mientras no sea anotado en los registros públicos con las formalidades que la misma ley establece.

Los que crean que sólo se casan ante el oficial público encargado del Registro Civil, quedarán casados manifestando su voluntad de casarse y asentando el acto también con las formalidades que se exigen.

De este modo se respeta la libertad de conciencia, hermosa conquista de la civilización, y el Estado sabe lo que tiene derecho de saber: que los contrayentes son legalmente hábiles para casarse y que se han casado.

En los demás contratos, para cuya validez la ley ha establecido la escritura pública como forma esencial para que queden concluidos, basta la habilidad de los contratantes y la constancia del contrato en el registro público de un escribano.

Exactamente lo mismo sucederá con el matrimonio, si el proyecto adjunto merece vuestra sanción; pues así como aquellos que no se les pregunta dónde ni cómo convinieron en las cláusulas del contrato, así también a los que vayan a inscribir su matrimonio no se les interrogará dónde ni cómo se han casado, bastando la inscripción en el registro público, de la manifestación de haberse casado.

Tal es el principio fundamental que sirve de base a este proyecto, reclamado por altas necesidades sociales, que se sienten cada día con mayor viveza; formulado con el propósito de garantizar para el ejercicio de uno de los actos

más trascendentales de la vida, la más amplia libertad de conciencia, amoldado en su espíritu, en su esencia y en sus fines, a las solemnes declaraciones de la Constitución de la República.

No es necesario, ni es oportuno, hacer aquí a su respecto un análisis minucioso, estudiándolo en todos sus detalles. Esa oportunidad llegará una vez que vuestra honorabilidad se sirva tomarlo en consideración.

Entretanto, queda entregado el proyecto de ley de matrimonio a vuestro ilustrado juicio y al público examen, y cumplida, por mi parte, la promesa que, sobre esta materia, os hice al abrir las sesiones del presente período legislativo.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

MIGUEL JUÁREZ CELMAN.

Filemón Posse.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Quedan modificadas las disposiciones del Título I, Sección II, Libro Primero del Código Civil, en la forma y con arreglo a lo que se establece en los artículo siguientes:

SECCIÓN SEGUNDA

De los derechos personales en las relaciones de familia

TITULO PRIMERO

DEL MATRIMONIO

CAPÍTULO I

Régimen del matrimonio

Artículo 2º — La validez del matrimonio, no habiendo ninguno de los impedimentos dirimentes establecidos en este título, con excepción del expresado en el inciso 4º del artículo 9º, será juzgada en la República por la ley del lugar en que se haya celebrado, aunque los contrayentes hubiesen dejado su domicilio para no sujetarse a las formas y leyes que en él rigen.

Art. 3º — Los derechos y las obligaciones personales de los cónyuges son regidos por las leyes de la República mientras permanezcan en ella, cualquiera que sea el país en que hubieran contraído el matrimonio.

Art. 4º — El contrato nupcial rige los bienes del matrimonio, cualesquiera que sean las leyes del país en que el matrimonio se celebró.

Art. 5º — No habiendo convenciones nupciales, ni cambio del domicilio matrimonial, la ley del lugar donde el matrimonio se celebró, rige los bienes muebles de los esposos, donde quiera que se encuentren o donde quiera que hayan sido adquiridos.

Si hubiese cambio de domicilio, los bienes adquiridos por los esposos antes de mudarlo son regidos por las leyes del primero. Los que hubiesen adquirido después del cambio, son regidos por las leyes del nuevo domicilio.

Art. 6º — Los bienes raíces son regidos por la ley del lugar en que estén situados.

Art. 7º — La disolución en país extranjero, de un matrimonio celebrado en la República Argentina, aunque sea de conformidad a las leyes de aquél, si no lo fuere a las de este código, no habilita a ninguno de los cónyuges para casarse.

CAPÍTULO II

De los esponsales

Art. 8º — La ley no conoce esponsales de futuro. Ningún tribunal admitirá demanda sobre la materia, ni por indemnización de perjuicios que ellos hubiese encausado.

CAPÍTULO III

De los impedimentos

Art. 9º — Son impedimentos dirimentes, que no pueden dispensarse y que hacen absolutamente nulo el matrimonio:

- 1º La consanguinidad entre ascendientes y descendientes sin limitación, sean legítimos o ilegítimos;
- 2º La consanguinidad entre hermanos o medio hermanos, legítimos o ilegítimos;
- 3º La afinidad en línea recta en todos los grados;
- 4º No tener la mujer catorce años cumplidos y el hombre dieciocho;
- 5º El matrimonio anterior mientras subsista;
- 6º Haber dado muerte a uno de los cónyuges, como autor principal o como cómplice, para casarse con el cónyuge superstite;
- 7º La locura declarada en juicio.

Art. 10. — La mujer mayor de catorce años y el hombre mayor de dieciocho, pero menores de edad, no pueden casarse entre sí, ni con otra persona, sin el consentimiento de su padre legítimo o natural que lo hubiese reconocido, o sin el de la madre a falta de padre, o sin el de tutor a falta de ambos, o en defecto de éstos sin el del juez.

CAPÍTULO IV

Del consentimiento

Art. 11. — Es indispensable, para la validez del matrimonio, el libre consentimiento de los contrayentes.

Art. 12. — El consentimiento puede expresarse por medio de apoderado, con poder especial en que se designe expresamente la persona con quien el poderdante ha de contraer matrimonio.

Art. 13. — La violencia, el dolo, el error sobre la persona y la locura no declarada judicialmente, vician el consentimiento.

CAPÍTULO V

De las diligencias previas a la celebración del matrimonio

Art. 14. — Los que pretendan contraer matrimonio se presentarán por escrito ante el juez del domicilio de la novia, manifestando su intento y pidiéndole que declare, previas las diligencias del caso, que no hay impedimento legal.

Art. 15. — Si algunos de los que pretenden casarse o ambos no supiesen o no pudiesen firmar, la solicitud será firmada a su ruego ante el juez por persona o personas que le sean conocidas, según que no sepan firmar ambos o uno de ellos.

Art. 16. — En la solicitud debe expresarse:

- 1º Los nombres y apellidos de los que quierán casarse;
- 2º Su edad;
- 3º Su nacionalidad, su domicilio y el lugar de su nacimiento;
- 4º Su profesión;
- 5º Los nombres y apellidos de sus padres, su nacionalidad, profesión y domicilio;
- 6º Si antes han sido o no casados, y, en caso afirmativo, el nombre y apellido de su anterior cónyuge, el lugar del casamiento y la causa de su disolución.

Art. 17. — A la solicitud deben acompañar:

- 1º Las partidas de su nacimiento;
- 2º Las del nacimiento y matrimonio de sus respectivos padres;

- 3º Las de defunción de sus cónyuges, en caso de haber sido anteriormente casados;
- 4º Copia, debidamente legalizada, de la sentencia ejecutoriada que hubiere declarado nulo el matrimonio anterior de uno o de ambos futuros esposos;
- 5º El consentimiento expreso del padre, de la madre, del tutor, y en su caso, la venia supletoria del juez, si alguno de los que pretenden casarse o ambos son menores de edad.

Art. 18. — En caso de no existir las partidas a que se refiere el artículo anterior, o cuando la inscripcíon en los registros se hubiese hecho bajo falsos nombres o como de padres no conocidos, esos hechos podrán probarse por los otros medios de prueba, admitidos en este código.

Art. 19. — Si las actuaciones se siguiesen ante jueces no letrados, por no haber juez letrado en el lugar, terminado el expediente, será inmediatamente remitido al juez letrado más inmediato, para su resolución.

Art. 20. — Tanto en el caso del artículo anterior, como en el de que las actuaciones se hubieren seguido ante juez letrado, éste no resolverá sin previa vista fiscal.

Art. 21. — Esa vista se expedirá dentro de tres días improrrogables, y el juez resolverá precisamente dentro de los tres días siguientes.

Art. 22. — Las actuaciones se harán en papel común y en el mismo se expedirán las copias de partidas de nacimiento, de matrimonio y de defunción; sin que las oficinas del Registro Civil puedan cobrar emolumento alguno.

CAPÍTULO VI

De la oposición

Art. 23. — Sólo pueden alegarse como motivo de oposición los impedimentos establecidos en este código.

La oposición que no se funde en la existencia de alguno de esos impedimentos, será rechazada sin más trámite.

Art. 24. — Cualquier pariente en grado sucesible de alguno de los que pretendan casarse puede oponerse al matrimonio siempre que la oposición se funde en alguno de los impedimentos de que habla el artículo 9º.

Art. 25. — Si se opusiesen varios parientes a la vez, deberán nombrar un sólo apoderado, con el que se seguirán las diligencias.

Art. 26. — La oposición puede deducirse ante el juez ante quien se hayan iniciado las diligencias, sea o no letrado.

Si no lo fuere, se limitará a substanciar la oposición, remitiendo el expediente al juez letrado más inmediato, para su resolución.

Art. 27. — Puede también deducirse la oposición ante dicho juez letrado, después que el no letrado le haya remitido el expediente a que se refiere el artículo 19.

Art. 28. — La oposición puede deducirse desde que se hayan iniciado las diligencias para el matrimonio hasta que éste se celebre.

Art. 29. — La oposición puede hacerse en un escrito o en acta levantada ante el juez, y debe expresarse:

- 1º El nombre y apellido, edad, estado, profesión y domicilio del oponente;
- 2º El parentesco que lo ligue con alguno de los futuros esposos;
- 3º El impedimento en que funda su oposición;
- 4º Los motivos que tenga para creer que existe el impedimento;
- 5º Si tiene o no documentos que prueben la existencia del impedimento.

Art. 30. — Si tuviere documentos, debe presentarlos en el mismo acto. Si no los tuviere, expresará el lugar donde existen y los detallará, si tuviere noticias de ellos.

Art. 31. — Deducida en forma la oposición, se dará conocimiento de ella a los futuros esposos.

Si alguno de ellos o ambos estuviesen conformes en la existencia del impedimento legal, el juez, sin más trámite, resolverá que no puede celebrarse el matrimonio.

Art. 32. — Si los futuros esposos negasen que hay impedimento, así lo expresarán dentro de cinco días desde el siguiente al en que se les dió conocimiento de la oposición, aduciendo cuanto tengan que alegar.

Art. 33. — Las diligencias ulteriores se seguirán con el futuro esposo.

Art. 34. — De la oposición y de la contestación se dará vista al ministerio fiscal, quien la evacuará dentro de tres días.

Art. 35. — Vencidos los tres días, háyase evacuado o no la vista fiscal, el juez recibirá la causa a prueba, si hubiere hechos conducentes a probar.

Art. 36. — El juez señalará un término prudencial para la prueba, sin que pueda exceder de veinte días, si la prueba ha de producirse dentro de la República.

Si ha de producirse en el extranjero, el término de prueba será el señalado para esos casos en la ley de procedimientos de los tribunales nacionales, con las formalidades en ella establecidas.

Art. 37. — Vencido el término de prueba, el juez pronunciará su fallo dentro de los diez días siguientes.

Art. 38. — El término para apelar es de tres días.

Art. 39. — La apelación se concederá en relación, y el tribunal superior resolverá dentro de los diez días siguientes al en que le hubiesen sido elevados los autos.

Art. 40. — Sin embargo de lo dispuesto en el artículo anterior, el tribunal superior admitirá la prueba ofrecida en los casos en que lo permita la ley de procedimientos de los tribunales nacionales, sin que el término pueda pasar de quince días.

Art. 41. — Cualquiera persona puede denunciar la existencia de alguno de los impedimentos establecidos en el artículo 9º, llenando los requisitos de los artículos 29 y 30.

Art. 42. — Hecha en forma la denuncia, el juez dará vista de ella al ministerio fiscal, quien, dentro de tres, deducirá oposición o manifestará que encuentra infundada la denuncia.

Art. 43. — La oposición fundada en la menor edad sólo puede ser deducida por el padre, en su defecto por la madre, y a falta de ambos por el tutor.

Art. 44. — Los padres no necesitan expresar la razón en que se funden para rehusar su consentimiento, y contra su disenso no se admite recurso alguno.

Art. 45. — Exceptúase el caso en que los padres se hallen gozando del usufructo de los bienes de su hijo, y entonces deben manifestar los motivos de su disenso.

Art. 46. — Los tutores siempre deben expresar los motivos de su oposición.

Art. 47. — Sólo son causas de oposición, en los casos de los dos artículos anteriores:

- 1º La existencia de cualquiera de los impedimentos expresados en el artículo 9º;
- 2º Enfermedad contagiosa de la persona que pretenda casarse con el menor o con la menor;
- 3º Conducta desarreglada o inmoral de dicha persona;
- 4º Haber sido condenado por delito de robo, hurto, estafa o a penitenciaría o presidio por cualquier otro delito;

5º Falta de medios de subsistencia y de aptitud para adquirirlos.

Art. 48. — Las causas de disenso serán juzgadas en juicio meramente informativo.

CAPÍTULO VII

De la celebración del matrimonio

Art. 49. — El juez dará a los futuros esposos copia legalizada del auto ejecutoriado en que se declare no haber impedimento para el matrimonio.

Art. 50. — Los futuros esposos pueden libremente casarse con arreglo a los dictados de su conciencia; pero, el matrimonio no se reputará legalmente celebrado, a los efectos civiles, mientras no se inscriba en el Registro Civil, de conformidad a las disposiciones de este título.

Art. 51. — Los futuros esposos se presentarán en la oficina del Registro Civil del domicilio de alguno de ellos, con la copia del auto que declare no haber impedimento, manifestando que se han casado de conformidad a los dictados de su conciencia y que quieren inscribir su matrimonio, para que produzca los efectos civiles establecidos por la ley.

Art. 52. — El jefe de la oficina del Registro Civil, sin más trámite, inscribirá el casamiento en el registro a su cargo, haciendo constar:

- 1º La fecha en que el acto tiene lugar;
- 2º Los nombres y apellidos, edad, profesión, domicilio y lugar del nacimiento de los comparecientes;
- 3º Los nombres y apellidos, profesión, domicilio y nacionalidad de sus respectivos padres, si fueren conocidos;
- 4º La transcripción literal del auto en que se declare no haber impedimento legal;
- 5º La manifestación de los esposos de haberse casado de conformidad a los dictados de su conciencia;
- 6º La firma de los comparecientes; y, en caso de no saber o de no poder firmar, la firma, a su ruego, de personas conocidas del jefe de la oficina;
- 7º La firma de dos testigos y la del jefe de la oficina;
- 8º La transcripción literal del poder, en caso que la inscripción se haga por medio de apoderado.

Art. 53. — Si los comparecientes manifestaren no haberse casado de modo alguno, se ha-

rán constar todos los requisitos establecidos en el artículo anterior, con excepción del expresado en el inciso 5º; y, en su lugar, la manifestación que harán de su voluntad de casarse, tomándose respectivamente por marido y mujer.

Art. 54. — El jefe de la oficina del Registro Civil entregará a los esposos copia legalizada del acta de inscripción.

Art. 55. — La ley no reconoce más matrimonios, a los efectos civiles, que los que consten en los registros públicos, con las formalidades que quedan establecidas.

Art. 56. — En los lugares donde no haya oficinas de Registro Civil y mientras se establezcan, los jueces llevarán el registro de matrimonios y practicarán todos los actos encomendados al jefe de la oficina del Registro Civil.

Art. 57. — Si los jueces no fueren letrados llevarán un registro duplicado, uno de cuyos ejemplares remitirán cada año al juez letrado más inmediato.

Art. 58. — Si se hubiese celebrado matrimonio religioso y alguno de los cónyuges rehúsa inscribirlo en el Registro Civil, el otro cónyuge tendrá acción para compelerlo a la inscripción.

Si ordenada la inscripción, fuese resistida, se hará por el juez en nombre del que la resiste y producirá todos los efectos legales.

CAPÍTULO VIII

Derechos y obligaciones de los cónyuges

Art. 59. — Los esposos están obligados a guardarse fidelidad, sin que la infidelidad del uno autorice al otro a proceder del mismo modo. El que faltare a esta obligación puede ser demandado por el otro por acción de divorcio, sin perjuicio de la que le acuerde el Código Penal.

Art. 60. — El marido está obligado a vivir en una misma casa con su mujer, a prestarle todos los recursos que le fueren necesarios y a ejercer todos los actos y acciones que a ella correspondan, haciendo los gastos judiciales necesarios, aun en el caso de que fuese acusada criminalmente. Faltando el marido a estas obligaciones, la mujer tiene derecho a pedir judicialmente que aquél le dé los alimentos necesarios y las expensas que le fuesen indispensables en los juicios.

Art. 61. — Si no hubiere contrato nupcial, el marido es el administrador legítimo de todos los bienes del matrimonio, incluso los de la mujer; tanto de los que llevó al matrimonio,

como los que adquiriese después por títulos propios.

Art. 62. — La mujer está obligada a habitar con su marido donde quiera que éste fije su residencia. Si faltase a esa obligación, el marido puede pedir las medidas judiciales necesarias y tendrá derecho a negarle alimentos. Los tribunales, con conocimiento de causa, pueden eximir a la mujer de esta obligación cuando de su ejecución resulte peligro para su vida.

Art. 63. — La mujer no puede estar en juicio, por sí ni por procurador, sin licencia especial del marido, dada por escrito, con excepción de los casos en que este código presume la autorización del marido o no la exige, o solo exige una autorización general o solo una autorización judicial.

Art. 64. — Tampoco puede la mujer, sin licencia o poder del marido, celebrar contrato alguno, ni desistir de un contrato anterior, ni adquirir bienes o acciones ni obligar sus bienes, ni contraer obligación alguna, ni remitir obligación a su favor.

La venia de que hablan este artículo y el anterior puede ser suplida por la del juez del domicilio en los casos en que este código lo permite.

Art. 65. — Se presume que la mujer está autorizada por el marido, si ejerce públicamente alguna profesión o industria, como directora de un colegio, maestra de escuela, actriz, etcétera, y en tales casos se entiende que está autorizada por el marido para todos los actos o contratos concernientes a su profesión o industria, si no hubiese reclamación por parte de él, anunciada al público o judicialmente intimada a quien con ella hubiese de contratar. Se presume, también, la autorización del marido en las compras al contado que la mujer hiciere, y en las compras al fiado de objetos destinados al consumo ordinario de la familia.

Art. 66. — No es necesaria la autorización del marido en los pleitos entre él y su mujer, ni para defenderse cuanto fuese criminalmente acusada, ni para hacer su testamento o revocar el que hubiese hecho, ni para administrar los bienes que se hubiese reservado por el contrato de matrimonio.

Art. 67. — La mujer, el marido y los herederos de ambos son los únicos que pueden reclamar la nulidad de los actos y obligaciones de la mujer por falta de licencia del marido.

Art. 68. — Bastará que la mujer sea solamente autorizada por el juez del domicilio, cuando estuviese el marido loco o en lugar no conocido, en los casos del artículo 135 de este

código, en cuanto a los actos que los menores casados no pueden ejecutar.

Art. 69. — Los tribunales, con conocimiento de causa, pueden suplir la autorización del marido, cuando éste se hallare ausente o impedido para darla.

Art. 70. — El marido puede revocar a su arbitrio la autorización que hubiere concedido a su mujer; pero, la revocación no tendrá efecto retroactivo en perjuicio de terceros.

Art. 71. — El marido puede ratificar general o especialmente los actos para los cuales no hubiere autorizado a su mujer. La ratificación puede ser tácita, por hechos del marido que manifiesten inequívocamente su aquiescencia.

Art. 72. — Los actos y contratos de la mujer no autorizada por el marido ni por el juez, obligan solamente sus bienes propios, si no se pidiese la rescisión, salvo el caso de que el acto o contrato redunde en beneficio de la sociedad conyugal, en cuyo caso obligará los bienes de la sociedad hasta la concurrencia del beneficio.

CAPÍTULO IX

Del divorcio

Art. 73. — El divorcio que este código autoriza consiste únicamente en la separación personal de los esposos, sin que se disuelva el vínculo matrimonial.

Art. 74. — No puede renunciarse en las convenciones matrimoniales la facultad de pedir el divorcio al juez competente.

Art. 75. — No hay divorcio por mutuo consentimiento de los esposos. Ellos no serán tenidos por divorciados sin sentencia de juez competente.

Art. 76. — Las causas del divorcio son las siguientes:

- 1ª Adulterio de la mujer o del marido;
- 2ª Tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro, sea como autor principal o como cómplice;
- 3ª La provocación de uno de los cónyuges al otro a cometer adulterio u otros delitos;
- 4ª La sevicia, si es tal que los cónyuges no puedan vivir reunidos sin peligro de la vida de uno de ellos o de grave daño corporal;
- 5ª Las injurias graves hechas por un cónyuge contra el honor del otro;
- 6ª Los malos tratamientos, aunque no sean graves, cuando sean tan frecuentes que hagan intolerable la vida conyugal;

7ª El abandono;

8ª La enfermedad contagiosa de uno de los cónyuges, mientras dure, si es que la tal vida marital produciría el contagio o infección.

Art. 77. — Puesta la acción de divorcio, o antes de ella en casos de urgencia, podrá el juez, a instancia de la parte, decretar la separación personal de los casados y el depósito de la mujer en casa honesta, dentro de los límites de su jurisdicción; determinar el cuidado de los hijos con arreglo a las disposiciones de este código, y los alimentos que han de prestarse a la mujer y a los hijos que no quedasen en poder del padre, como también las expensas necesarias a la mujer para el juicio de divorcio.

Art. 78. — Si alguno de los cónyuges fuese menor de edad, no podrá estar en juicio, como demandante o demandado, sin la asistencia de un curador especial, que para este solo fin elegirá la parte, y en su defecto, nombrará el juez.

Art. 79. — Toda clase de prueba será admitida en este juicio, con excepción de la confesión o juramento de los cónyuges.

CAPÍTULO X

Efectos del divorcio

Art. 80. — Separados por sentencia de divorcio, cada uno de los cónyuges puede fijar su domicilio o residencia donde crea conveniente, aunque sea en el extranjero; pero, si tuviese hijos a su cargo, no podrá transportarlos a país extranjero sin licencia del juez del domicilio.

Art. 81. — Si la mujer fuese mayor de edad, podrá ejercer todos los actos de la vida civil.

Cualquiera de los cónyuges que fuese menor de edad, quedará sujeto a las disposiciones de este código, relativas a los menores emancipados.

Art. 82. — Si durante el juicio de divorcio, la conducta del marido hiciese temer enajenaciones fraudulentas, o disipación de los bienes del matrimonio, la mujer podrá pedir al juez de la causa que se haga inventario de ellos y se pongan a cargo de otro administrador, o que el marido dé fianza del importe de los bienes. Dada la sentencia de divorcio, los cónyuges pueden pedir la separación de los bienes del matrimonio, con arreglo a lo dispuesto en el título De la Sociedad Conyugal.

Art. 83. — El cónyuge inocente que no hubiese dado causa al divorcio, podrá revocar las donaciones o ventajas que por el contrato del

matrimonio hubiere hecho o prometido al otro cónyuge, sea que debiesen tener efecto en vida o después de su fallecimiento.

Art. 84. — Los hijos menores de cinco años quedarán a cargo de la madre. Los mayores de esta edad, se entregarán al esposo que, a juicio del juez, sea el más a propósito para educarlos, sin que se pueda alegar por el marido o por la mujer preferente derecho a tenerlos.

Art. 85. — El padre y la madre quedarán sujetos a todos los cargos y obligaciones que tienen para con sus hijos, cualquiera sea el que hubiere dado causa al divorcio.

Art. 86. — El marido que hubiere dado causa al divorcio debe proveer a la subsistencia de la mujer, si ella no tuviere medios propios suficientes. El juez determinará la cantidad y forma, atendidas las circunstancias de ambos.

Art. 87. — Cualquiera de los esposos que hubiere dado causa al divorcio, tendrá derecho a que el otro, si tiene medios, le provea de lo preciso para su subsistencia, si le fuese de toda necesidad.

Art. 88. — Si se reconciliasen marido y mujer, se remitirá todo al estado que tenía antes del divorcio o de la demanda. La ley presume la reconciliación cuando el marido cohabita con la mujer después de haber dejado la habitación común.

CAPÍTULO XI

De la disolución del matrimonio

Art. 89. — El matrimonio válido no se disuelve sino por la muerte de uno de los esposos.

Art. 90. — El matrimonio que puede disolverse según las leyes del país en que se hubiese celebrado, no se disolverá en la República sino de conformidad al artículo anterior.

Art. 91. — El fallecimiento presunto del cónyuge ausente o desaparecido, no habilita al otro esposo para contraer nuevo matrimonio.

Mientras no se pruebe el fallecimiento del cónyuge ausente o desaparecido, el matrimonio no se reputa disuelto.

CAPÍTULO XII

De la nulidad del matrimonio

Art. 92. — La acción de nulidad de un matrimonio no puede intentarse sino en vida de los dos esposos.

Art. 93. — Las disposiciones de este código sobre nulidad de los actos jurídicos, son extensivas a la nulidad de los matrimonios.

Art. 94. — Son causas de nulidad absoluta los impedimentos establecidos en el artículo 9º de este título.

Art. 95. — La nulidad del matrimonio sólo puede ser demandada por el cónyuge que ignoró la existencia del impedimento, y por los que pueden oponerse a la celebración del matrimonio.

CAPÍTULO XIII

Efectos de la nulidad del matrimonio

Art. 96. — Si el matrimonio nulo hubiese sido contraído de buena fe por ambos cónyuges, producirá hasta el día en que se declare su nulidad, todos los efectos del matrimonio válido, no sólo con relación a las personas y bienes de los cónyuges, sino también en relación a los hijos.

En tal caso, la nulidad sólo tendrá los efectos siguientes:

- 1º En cuanto a los cónyuges, cesarán todos los derechos y obligaciones que produce el matrimonio, con la sola excepción de la obligación recíproca de prestarse alimentos en caso necesario;
- 2º En cuanto a los bienes, los mismos efectos del fallecimiento de uno de los cónyuges; pero antes del fallecimiento de uno de ellos, el otro no tendrá derecho a las ventajas o beneficios que en el contrato de matrimonio se hubiesen hecho al que de ellos sobreviviese;
- 3º En cuanto a los hijos concebidos durante el matrimonio putativo, serán considerados como legítimos, con los derechos y obligaciones de los hijos de un matrimonio válido;
- 4º En cuanto a los hijos naturales concebidos antes del matrimonio putativo entre el padre y la madre, y nacidos después, quedarán legitimados en los mismos casos en que el subsiguiente matrimonio válido produce este efecto.

Art. 97. — Si hubo buena fe sólo de parte de uno de los cónyuges, el matrimonio hasta el día de la sentencia que declare la nulidad, producirá también los efectos del matrimonio válido, pero sólo respecto al esposo de buena fe y a los hijos, y no respecto al cónyuge de mala fe.

La nulidad en este caso tendrá los efectos siguientes:

- 1º El cónyuge de mala fe no podrá exigir que el de buena fe le preste alimentos;
- 2º El cónyuge de mala fe no tendrá derecho a ninguna de las ventajas que se le hubiesen acordado en el contrato de matrimonio;
- 3º El cónyuge de mala fe no tendrá los derechos de la patria potestad sobre los hijos; pero sí las obligaciones.

Art. 98. — Si el matrimonio nulo fuese contraído de mala fe por ambos cónyuges no producirá efecto civil alguno.

La nulidad tendrá los efectos siguientes:

- 1º La unión será reputada como concubinato;
- 2º En relación a los bienes se procederá como en el caso de la disolución de una sociedad de hecho, quedando sin efecto alguno el contrato de matrimonio;
- 3º En cuanto a los hijos, serán considerados como ilegítimos y en la clase en que los pusiese el impedimento que causare la nulidad.

Art. 99. — Consiste la mala fe de los cónyuges en el conocimiento que hubiesen tenido o debido tener, el día de la celebración del matrimonio, del impedimento que causa la nulidad.

No habrá mala fe por ignorancia o error de derecho.

Tampoco la habrá por ignorancia o error de hecho que no sea excusable, a menos que el error fuese ocasionado por dolo.

Art. 100. — El cónyuge de buena fe puede demandar al cónyuge de mala fe y a los terceros que hubiesen provocado el error, por indemnización de daños y perjuicios.

Art. 101. — En todos los casos de los artículos precedentes, la nulidad no perjudica los derechos adquiridos por terceros, que de buena fe hubiesen contratado con los supuestos cónyuges.

CAPÍTULO XIV

Del matrimonio anulable

Art. 102. — Puede pedirse la anulación del matrimonio cuando haya habido error sobre la persona, violencia o dolo que vicien el consentimiento.

Puede también pedirse en caso de locura existente al tiempo de la celebración del matri-

monio, pero no declarada judicialmente antes de la celebración.

Art. 103. — Sólo puede intentar la acción de nulidad el que haya sufrido el error o la violencia, o haya sido víctima del dolo.

Art. 104. — El marido no podrá intentar esta acción después de consumado el matrimonio.

La mujer podrá intentarlo por causa de violencia hasta diez días después que esta cese; aunque el matrimonio se hubiese consumado.

Art. 105. — En el caso del segundo párrafo del artículo 102, puede pedirse la anulación del matrimonio por el cónyuge que ignoró la locura del otro.

Art. 106. — La impotencia anterior y absoluta acompañada de incapacidad en un cónyuge, da derecho al otro para pedir la anulación del matrimonio.

Art. 107. — En cuanto a los efectos de la anulación del matrimonio, son aplicables las disposiciones del capítulo anterior.

Art. 108. — El juez que declare nulo un matrimonio, ordenará que se haga la correspondiente anotación en el registro en que se inscribió dicho matrimonio.

CAPÍTULO XV

De las segundas o ulteriores nupcias

Art. 109. — La mujer no podrá casarse hasta pasados diez meses de disuelto o anulado el matrimonio, a menos de haber quedado encinta, en cuyo caso podrá casarse después del alumbramiento.

Art. 110. — La mujer que se casase en contravención del artículo anterior, perderá los legados y cualquiera otra liberalidad o beneficio que el marido le hubiese hecho en su testamento.

Art. 111. — La viuda que, teniendo bajo su potestad hijos menores de edad, contrajese matrimonio, debe pedir al juez que les nombre tutor.

Si no lo hiciese, es responsable con todos sus bienes de los perjuicios que resultaren a los intereses de sus hijos.

La misma obligación y responsabilidad tiene el marido de ella.

CAPÍTULO XVI

Disposiciones transitorias

Art. 112. — En la primera edición oficial que haga del Código Civil, se incorporará esta

ley en lugar del Título Primero. Sección II, Libro Primero, arreglando la numeración que corresponda a los artículos.

Art. 113. — Esta ley empezará a regir desde el primero de Enero de 1888, y sus disposiciones sólo serán aplicables a los matrimonios que se celebren desde esa fecha.

Art. 114. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Filémón Posse.

Sr. Presidente. — Está en discusión en general.

Sr. Rodríguez (C. J.). — Pido la palabra.

El proyecto de ley de matrimonio que está en discusión, fué presentado por el Poder Ejecutivo en las sesiones del año anterior. En el mensaje con que acompañó este proyecto al Honorable Senado, están consignadas las razones de orden público que, en concepto del Poder Ejecutivo, lo hacen necesario y recomiendan su sanción.

Sin embargo, señor presidente, la Comisión lo ha estudiado con la meditación e interés que la naturaleza del asunto requiere.

Mucho ha meditado, señor presidente, sobre la oportunidad y conveniencia de esta ley que viene a reformar nuestra legislación sobre el matrimonio, que, como se sabe, es materia de suyo grave y delicada, por que es la base de la organización de la familia y de la sociedad.

Al estudiar esta ley, señor presidente, la Comisión se ha propuesto dos cuestiones que, en su concepto, son las únicas pertinentes para juzgar, como he dicho antes, de su oportunidad y conveniencia, tomando en cuenta los factores de nuestro progreso, la índole de nuestras instituciones y el estado actual de nuestra sociabilidad.

Pero antes de seguir adelante, señor presidente, en este informe, voy a hacer una declaración que creo de actualidad y que reclama la naturaleza de este asunto.

Para estudiar esta ley, la Comisión de Legislación no ha consultado ninguna ley extranjera, sólo ha tenido en cuenta y se la inspirado en los preceptos de la Constitución, porque, como argentinos, como legisladores, como representantes de la soberanía nacional en este Congreso, no reconocemos otra ley, ni otra autoridad superior a esa Constitución.

Ella es la ley suprema del país, porque es la voluntad soberana del pueblo, cuyo espíritu, señor presidente, se cierne, como el de Dios sobre nuestras cabezas en este recinto; se cierne sobre todas las cabezas de los que habitan

el territorio de la República, amparando todos los derechos y garantizando todos los beneficios de la libertad, que ese pueblo ha conquistado para nosotros, para nuestros hijos y para todos los hombres del mundo que quieran habitar nuestro suelo. (*Aplausos*).

Sr. Presidente. — Está prohibida a la barra toda manifestación.

Sr. Rodríguez (C. J.). — Decía, señor presidente, que para el estudio de esta ley, la Comisión se había propuesto dos cuestiones. Se ha preguntado, en primer lugar, si el matrimonio como institución social puede y debe ser legislado y reglamentado por la autoridad civil, es decir, por la autoridad soberana del Estado; se ha preguntado, en segundo lugar, si es conveniente y oportuno quitar a la iglesia católica la intervención que el Estado le confiere en estos asuntos que versan sobre matrimonio, etcétera.

Sobre la primera cuestión, señor presidente, la Comisión cree que no puede discutirse ni ponerse en duda, el derecho del gobierno para legislar y reglamentar una institución que es esencialmente social.

El matrimonio, señor presidente, es de derecho natural; como acto humano que depende solo de la voluntad del hombre; es un contrato y como tal contrato existe ya, así considerado desde el origen del mundo. Así nos lo enseña el texto sagrado del Génesis, que nos revela ese origen como nos reveló también el origen del hombre sobre la tierra, a quien vemos por medio de este contrato de matrimonio, libremente consultado, libremente por su voluntad realizado, cumplir su destino creciendo y multiplicándose en el tiempo.

Por medio de este contrato, señor presidente, el hombre ha formado familia, grupos de familias que a su vez han formado pueblos y ciudades, quienes a su vez, han constituido gobiernos para el mejoramiento de sus instituciones, para proveer a su felicidad, orden, bienestar y progreso.

Todos los gobiernos que se han sucedido desde la época paradisiaca hasta nuestros días, así lo han considerado, y como tal han legislado sobre él, haciendo uso de un derecho soberano que tienen, y han reglamentado siempre las relaciones de derecho que nacen de ese contrato, de esa unión de dos personas de distinto sexo, que se llama matrimonio.

El matrimonio, como he dicho antes, es de derecho natural; es un contrato, porque de él nacen relaciones de derecho en la familia, que

la autoridad civil, el Estado, tiene el derecho de legislar y reglamentar.

De esta manera, como dejo dicho, existe desde el origen del mundo; pero, si no se puede negar a la autoridad civil la facultad de legislar las relaciones de derecho que nacen de este contrato, no sucede lo mismo con la fórmula en que debe realizarse, que ha sido siempre materia de acalorada discusión entre la iglesia católica y los gobiernos de los Estados.

La iglesia pretende, señor presidente, que siendo el matrimonio de institución divina, tiene ella el derecho de legislarlo; y lo ha elevado a la categoría de sacramento atribuyéndose autoridad propia para conocer en todos los asuntos que se relacionan con él. Pero esta pretensión de la Iglesia no puede sostenerse ante la razón, ante la lógica, ni ante la historia.

He dicho que el contrato es de derecho natural. Pues bien, en este sentido, los gobiernos de todas las épocas lo han reglamentado como han reglamentado las relaciones de derecho que hacen de toda declaración de voluntad, de todo acto humano destinado a producir efectos civiles. Esto es lo que significa el contrato de matrimonio.

La iglesia católica, señor presidente, recién en el siglo IV, es decir, cuatrocientos años después de la venida de Jesucristo, su fundador, elevó a la categoría de sacramento el contrato de matrimonio legislando sobre él.

Los concilios que le han sucedido hasta el Concilio de Trento, han seguido legislando sobre el matrimonio, y los pueblos que salían del paganismo y aceptaban el catolicismo, aceptaban también su legislación sostenida por los emperadores que también se hacían cristianos como se ve en las novelas de Justiniano y en los demás códigos posteriores.

De manera, pues, señor presidente, que si la iglesia ha legislado el matrimonio y su legislación ha dominado todo el derecho hasta nuestros días, ha sido porque los emperadores lo aceptaban como leyes civiles del Estado.

En Francia, pueblo católico, donde no ha sido aceptado el Concilio de Trento, las disposiciones de ese Concilio no tienen fuerza de ley, no rigen.

Lo mismo ha sucedido en el Imperio Austro-Húngaro hasta el año 1868 en que la autoridad civil con el mismo derecho con que mandó cumplir esas disposiciones, las ha abrogado y ha dictado las disposiciones civiles que reglamentan ese contrato, estableciendo el matrimonio civil.

Este es, pues, nuestro caso, señor presidente.

América, los reyes cristianos de la metrópoli, aceptaron la legislación de la Iglesia, la pusieron en práctica y la mandaron cumplir.

Hoy el Congreso argentino revisa esa legislación y tiene el más perfecto derecho para hacerlo, y en ese sentido, como soberano, obra y debe obrar.

Esto en cuanto al derecho.

Voy a estudiar ahora el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo.

Este proyecto de ley que ha sido recibido con aplauso por toda la prensa ilustrada e independiente de la República, lo que quiere decir que cuenta ya de antemano con la sanción de la opinión pública, no se aparta de los principios jurídicos que son del resorte de la autoridad civil; él sólo interviene en lo que es materia del derecho civil, común a todos los contratos: establece la habilidad o capacidad de las partes para celebrar el contrato de matrimonio.

Siguiendo estos principios de riguroso derecho, el proyecto deja a los futuros esposos la libertad de casarse conforme a los dictados de su conciencia.

Esta fórmula, que es nueva y que honra altamente al señor ministro de culto que la ha concebido y proyectado, es la expresión más respetuosa y sincera de la libertad de cultos sancionada por nuestra Constitución.

En esta fórmula, señor presidente, caben y pueden desenvolverse libremente todas las creencias religiosas y en concepto de la Comisión, es la aplicación más rigurosa y lógica de las garantías que la Constitución acuerda a todos los hombres del mundo que quieran habitar nuestro territorio, de profesar libremente su culto, de casarse y testar conforme a las leyes civiles que reglamentan el ejercicio de este derecho, y digo leyes civiles, señor presidente, porque la Constitución no dice una palabra de leyes eclesiásticas, de leyes cristianas, ni de leyes divinas. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*).

De esta manera, señor presidente, el sacramento de la Iglesia, que no tiene otro objeto que santificar la unión y llenar de gracia a las personas que lo reciben, queda íntegro, con todo el valor y la eficacia que la Iglesia le atribuye, y no se saca de los altares donde la conciencia de los contrayentes quieran pronunciar sus votos y elevar sus paces al Dios que creen.

De esta manera, señor presidente, el matrimonio puede celebrarse en su verdadero carácter, por el mutuo consentimiento de las partes, santificado por la Iglesia a que los cónyuges pertenecen, si es que la tienen.

Si todo esto es verdad, señor presidente, si

el matrimonio se realiza por la voluntad de las partes de conformidad a esta ley, no produce sin embargo efectos civiles, y para que los produzca es necesario que se inscriba en el registro público del Estado, es decir, en el Registro Civil.

Esta inscripción es la prueba que la ley exige del hecho del matrimonio, porque de ese hecho así constatado, nacen las relaciones de derecho y efectos civiles que la misma ley le atribuye.

Tal es el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, y del que a grandes rasgos he informado a la Honorable Cámara.

Respecto a la segunda cuestión que la Comisión se ha propuesto: si es conveniente y necesario sacar de la Iglesia católica la jurisdicción que el Código Civil le había conferido para conocer en los asuntos que se relacionan con el matrimonio, la Comisión cree que sí, que es necesario y que es conveniente.

El matrimonio se rige por la ley civil y son los jueces civiles los que deben conocer del hecho y del derecho en esa materia legislada por la ley civil.

La Constitución ha declarado que todos los habitantes son iguales ante la ley, y no se comprende, señor presidente, que se dicte una ley para los euáqueros, otra ley para los católicos, otra para los protestantes, y en fin una legislación especial para cada culto. (*¡Muy bien!*).

Todos los habitantes son iguales ante la ley, y la ley debe ser común para todos.

Por otra parte, señor presidente, nada escapa a la ley; todas las relaciones de familia están legisladas. La sociedad conyugal, la vida marital, los derechos de los hijos, los derechos de los padres, la administración de bienes, todo, en fin, está sujeto a los hechos que esa ley legisla y sólo el lecho conyugal queda sin legislar, porque hasta allí no llega la acción de la ley, pues, como dice la Constitución, las acciones privadas están reservadas a Dios y a la conciencia y valen de la jurisdicción de los magistrados.

No sé teología y no sé si el lecho conyugal puede entrar en la legislación de la Iglesia.

Por otra parte, señor presidente, la justicia se administra en nombre de la soberanía del pueblo; allí en la Iglesia, en los tribunales eclesiásticos no está nuestra soberanía; no es conocida, se la niega, se la rechaza, más aún, señor presidente, lo que es un colmo, se declara a la faz del Senado que es súbdita de la Iglesia, que está sujeta a sus leyes.

Como argentino y como representante que soy de la soberanía nacional, yo rechazo esa

afirmación, y la rechazo con toda la energía de que soy capaz.

Nuestra soberanía no es súbdita de nadie en la tierra; ella tiene su origen en el pueblo y el pueblo tiene este Sinaí para expresar su voluntad soberana, que sale en forma de leyes, para cumplirse dentro del territorio de la Nación, con toda la eficacia que ellas revisten! (*¡Muy bien!*).

Por estas consideraciones, señor presidente, la Comisión de Legislación en mayoría tiene el honor de aconsejar la sanción del proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, con las reformas que he indicado.

He dicho.

Varios señores diputados.—*¡Muy bien!* *¡Muy bien!*

Sr. Funes. — Pido la palabra.

Señor presidente: Pertenezco a la Comisión de Legislación y habría deseado mucho firmar de acuerdo con mis honorables colegas.

Hemos tenido largas conferencias en la Comisión con el señor ministro; en el deseo de presentarnos de acuerdo, propuse algunas fórmulas, procurando allanar con discreción las dificultades que nacían de la diversidad de creencias e ideas.

Respeto las opiniones de los demás y a mi turno lo demando para las mías, pues por ningún respeto ni por consideración alguna jamás abdicaré de mis convicciones.

Voy a empezar por las últimas palabras del señor miembro informante, mi honorable colega, cuando ha invocado la soberanía nacional.

Esto se allana fácilmente.

¿Quién discute la soberanía? ¿Para qué venir a hablar aquí de luchas? ¿Dónde está ese peligro? ¿Cuál es el Papa que se presenta armado a arrebatarnos la soberanía? Son palabras vanas, fantasmas que sólo podrán impresionar al vulgo.

No, señor presidente; ya pasaron esos tiempos; y esos hechos tenían su explicación.

Hay escritores, librepensadores, y no serán por cierto más liberales que ellos, los que sostienen el proyecto, que están de acuerdo con lo que yo sostengo.

Macaulay y Guizot dicen que el papado hizo grandes servicios a la humanidad, porque mil veces su influencia ha salvado a los pueblos de la tiranía.

Gregorio VII pretendió apoderarse del imperio universal; con buena intención, como Enrique IV, con el propósito de asegurar la paz, pero se equivocó. Perfectamente.

Dice Guizot: «Es tan completa la organización de la Iglesia; son tan sabios los principios en que reposa, que aun los pontífices que han

querido ultrapasar los límites de su misión elevada, escollaron en el mismo espíritu que le inspiró su fundador.» Esto es reconocido generalmente por los grandes pensadores.

¿Por qué? Porque no se le permite emplear la fuerza, ni apoderarse de la administración, ni gobernar; y por mucha influencia que adquiriera, teniendo que valerse de otro instrumento, nunca podrá ejercer la opresión de un emperador o rey cuando se hace jefe supremo de la religión. Siempre se ha preocupado respecto de cómo se aumentan las facultades de los emperadores.

¡Demasiado tienen con la espada!

La Constitución nacional, se dice como un gran argumento, no habla de religión ni habla de leyes eclesiásticas. ¿Para qué se repite esto? Cae por su misma nulidad.

Sí, habla, y si no, ¿qué quiere decir «sostiene el culto católico»?

¿Acaso sostener el culto es hacer tres catedrales y tener curas católicos?

No, señor; no puede ser ésta la doctrina. Tan cierto es esto, que anualmente empleamos fuertes cantidades para formar un clero digno del pueblo argentino, porque se siente esa necesidad. Y aun cuando no tuviéramos ese deber impuesto por la Constitución, lo haríamos por la exigencia de la opinión, por la voluntad del pueblo.

¿Qué significa, señor, eso de «poder extraño»? Es una frase que no debía usarse en este recinto; al menos yo no la usaría. «¡Vamos a emanciparnos de un poder extraño!», de un anciano respetable, que no tiene más voz que para sostener el derecho. Así levantó su voz en favor de Polonia cuando todos los reyes «civilizados» se repartían sus despojos.

Así bendijo la mano que tronzó las cadenas de los esclavos del Brasil. Siempre y constantemente se oyó su palabra en favor del oprimido, en favor de la igualdad de los hombres aunque sin otra arma que su protesta y su influencia sobre la opinión.

¿Cómo es que este anciano, que no tiene reinos, nunca ha recibido mayores homenajes ni ovaciones que ahora, ni más embajadores ante su culto y su jurisdicción? ¿Por qué? Porque hay una autoridad moral superior al pueblo y superior a la historia.

Bien; yo respeto lo que es digno de respetarse: la Constitución.

¿Cuál es la autoridad extraña ofensiva de que se nos viene hablando, que trata de oprimirnos? Si se considera extraña la autoridad del Sumo Pontífice, ¿por qué se manda celebrar con él Concordato, por qué el Hono-

rable Senado nombra los obispos que deben ser presentados ante esa autoridad? No creo que opine el señor senador, que presentemos otros obispos ante el emperador de Alemania o de otro soberano extranjero.

La Constitución, que ha sabido más que todos nosotros, ha tomado el hecho sancionado por la mayoría del pueblo argentino, que es católico y como tal recibe ese hecho que respeto y aplaudo.

Así es que presentamos los obispos ante el Romano Pontífice y se ha de seguir practicando del mismo modo, pese a quien pese.

Véase, pues, cómo no tiene fuerza alguna y es inoportuno, eso de la soberanía nacional; son palabras que tienen muchas explicaciones...

No, señor, no tiene que ver nada absolutamente la soberanía nacional en esto; y tiene que ver mucho la soberanía espiritual, porque es indispensable, necesaria para la civilización. Aunque fuera solamente como un medio de libertad, siempre convendría que hubiese una voz que fuese independiente y proclamara la verdad.

Castelar, a quien no se puede considerar como clerical, dice: «Es necesario que el Papa sea independiente, porque el padre de un pueblo de más de doscientos millones de católicos, el maestro y sacerdote de nuestras esposas y de nuestras hijas, debe ser independiente.»

Lo mismo dicen Guizot y Thiers.

Me parece que merecería algún respeto estos nombres.

Pero, señor, se trata de esta cuestión: es un principio que todos los escritores aplauden y principalmente los del pueblo inglés: que no se hagan reformas sino cuando «sean exigidas» por una suprema necesidad. El mensaje del Poder Ejecutivo cuando proyecta la ley, dice que hay muchos individuos que no tienen creencias y a quienes les es imposible celebrar matrimonio, lo que no es muy exacto. Aun cuando no tengan congregación, les bastaría un sacerdote, y en absoluta imposibilidad de éste, un anciano.

Los únicos que no tendrían sacerdotes ni ancianos, ni amigos para casarse ante ellos, serían los que desconocen la existencia de Dios. Mas no comprendo que haya algún ateo; no puede ser. Un ser racional, es imposible que no comprenda, que no sienta, que no vea la primera verdad.

Si hay alguno que realmente no cree que hay leyes naturales y divinas, ni cree que hay deber, ni tiene sentimientos; que no ama, ni desea ser amado, es un anormal que merece compasión por su desgracia.

No puede ser; aunque me digan que esto existe, no lo creo. Por consiguiente, será muy raro; será algún descreído, un irreligioso, un indiferente que con motivo de la Bolsa, de la política, de los negocios, se olvidara de todo eso; aunque le guste que su señora sea piadosa y las hijitas también; pero de lo que él no se olvidará, es de los pesos y los papeles.

Supongamos que haya un hombre en esas condiciones: convengo que se le dé permiso para hacer familia, muy bien. Es conveniente que tenga familia, y como no cree en los sacramentos, vamos a presentarle un medio de tener una familia legal y de que sus hijos se puedan presentar sin rubor. Perfectamente, ¿pero qué tiene que ver esta otra parte: yo traigo libertad para los que no tienen religión? Pero a los que la tienen se les quiere imponer la necesidad de acudir al juez. Y si el juez dice que no pueden casarse, no se podrán casar. No les prohíbe directamente que lo realicen ante la Iglesia, pero esto es muy grave, se les considera haber cometido una falta, un crimen sin motivo ni necesidad.

Pero, señor presidente, ¿quién reclama esto? Los católicos son los beneficiados únicamente, según parece. ¿Pero qué católico reclama o pide esto? Ninguno. Entonces, ¿cómo se quiere darles la libertad de que se habla? No es cierto; es absurdo.

Pero vuelvo a la cuestión principal, que es la que me ha inducido a firmar en disidencia el proyecto.

¿Quién decide sobre el vínculo del matrimonio? Se dice: el interés solamente.

No es una sociedad de intereses; es especial, indisoluble. Es una sociedad de amor, en que se interesa la felicidad de los hijos y toda la sociedad. Es una institución que en todos tiempos y en todas las naciones se ha consagrado por la religión.

Los emperadores cristianos no concedieron sino que reconocieron el derecho de la Iglesia. Ahí está el texto de Justiniano en que dice: «Sancionamos «las sagradas reglas que seguimos». Los cánones del Concilio de Trento fueron reconocidos por todos los católicos.

Pero dejémonos de esto; estamos hablando para católicos y no católicos. Los católicos deben saber que el sacramento del matrimonio fué instituido desde el principio del cristianismo; que el Concilio de Trento lo declara expresamente en los cánones 1º y 12 de la sesión 24. Los cánones de este concilio fueron recibidos por todos los pueblos y soberanos católicos.

El Concilio de Trento decidió que es sacra-

mento y decidió que correspondía a la Iglesia el acto matrimonial.

Aun cuando el señor miembro informante dice que fué en el siglo IV que se estableció como sacramento, yo le digo y aseguro que en el primer siglo del cristianismo fué instituido por Cristo.

Ya que el señor senador me ha citado el Antiguo Testamento, no me negará el Nuevo, en el que el apóstol San Pablo dice, hablando del matrimonio: «Este sacramento es grande; mas yo digo en Cristo y en la Iglesia.»

Después viene Santo Tomás, que también fué hombre grande, gran filósofo, gran teólogo y, según V. Cousin, el primero de su época, y que por su autoridad es el autor que suele citarse en contra, y dice: — haré la cita en español —: «En cuanto es oficio de la naturaleza, está reglado por derecho natural; en cuanto es oficio de la comunidad, está reglado por la sociedad; y en cuanto es sacramento, está reglado por derecho divino.»

Distingue perfectamente; y los mismos autores, los que son menos afectos a la disciplina eclesiástica, declaran que Santo Tomás reconoce en la autoridad civil el derecho de reglar los efectos civiles, pero no de manera que venga a perjudicar, que venga a ofender las funciones eclesiásticas, la substancia del acto, lo que sucedería si se sancionara el proyecto. Pío IX en varias ocasiones solemnes ha sostenido estos mismos derechos de la Iglesia, que se han querido poner en duda. «Disponed de los intereses, de los efectos civiles — decía al rey de Italia — mas respetad los derechos de la Iglesia, que no tenéis derecho de alterar.» Nunca el pontífice ha consentido en el matrimonio civil, como se propone.

Se dice que no se pone óbice para casarse ante la Iglesia. Mas fíjese que sin permiso del juez no se puede verificar. Es decir, se puede contraer matrimonio, sufriendo el gravamen de grandes perjuicios; lo que viene a ser una rémora, un gran obstáculo, pero absolutamente injusto, pues no se ha cometido delito alguno.

Señor presidente: recuerdo que en el Parlamento de la Confederación se presentó el proyecto de celebrar un tratado con una nación vecina, obligándonos a devolver el esclavo fugitivo que se asilara en nuestro suelo. Era entregar el pobre negro para que expirara bajo los azotes del opresor.

Hubo fuerte resistencia en las Cámaras, sí, señor; pero al fin el ministerio triunfó. Sin embargo no se realizó el tratado... porque la opinión pesa, porque vale algo la opinión. El

gobierno más poderoso no puede mirarla con desdén.

Después se pretendió hacer otro tratado por el que se nos iban a traer seis mil liberales de Nápoles; eran los que gemían en las cárceles de Nápoles porque conspiraban contra el rey, a quien después lograron derrocar. Iban a venir libres pero atados y con dos buques de guerra al costado, obligados a estar de colonos a la derecha del Paraná. Hubo gran oposición, se manifestaron sentimientos generosos en el Congreso, pero el ministerio triunfó. Tampoco se verificó el tratado. No se puede desoir la opinión impunemente.

Me asiste la esperanza, señor presidente, aun cuando pase este proyecto, que los inconvenientes se harán sentir muy pronto. Serán tan graves, que nos veremos obligados a reformar esta ley en conformidad a nuestras costumbres y creencias.

En España, después de la revolución del 68, en que muchos se hallaban atacados del vértigo contra las sotanas; en que por lo general querían aparecer liberales, se dió una ley de este género; pero fué imposible practicarla. Se restableció la monarquía y fué modificada. Ultimamente el ministerio ha presentado un proyecto que los liberales dicen tiene un dècimo de liberalismo.

En Hungría también se ha reformado.

En Francia vino esto cuando la revolución, mas, ¿cuál fué el resultado de su volubilidad en las instituciones? Que decayendo de su grandeza dos veces ha sido humillada por los extranjeros. Tan cierto es, y tanto se halla grabado en la conciencia de todos que la Iglesia es la única que debe resolver sobre el vínculo del matrimonio, que Bonaparte lo reconoció. En posesión del mayor poder, y rodeado de gran prestigio, se dirigió a Pío VII, rogándole que disolviera o anulara el vínculo que unía en matrimonio a su hermano Jerónimo con la señorita Paterson.

El Papa le contestó con toda cortesía: «Mas de cualquier modo que hayamos considerado el asunto, ha resultado de nuestras meditaciones que entre todos los motivos que se han propuesto... no hay uno que nos permita contestar a vuestra majestad del modo que deseamos, para declarar la nulidad del referido matrimonio.»

Después, cuando el mismo Napoleón trató de anular y disolver su matrimonio con Josefina, no se atrevió a hacer igual solicitud, convencido de la firmeza inquebrantable del Sumo Pontífice en el cumplimiento de sus deberes.

Está en la conciencia de todos que es preciso respetar los principios y que en esto no se puede mezclar la autoridad civil sin invadir los derechos de la Iglesia.

Señor presidente: el matrimonio, como ha dicho el señor miembro informante, es un contrato natural; y sobre esto mismo hay grandes cuestiones, porque es un contrato tan especial que no es real, ni personal; es un contrato tan especial, que no hay libertad de rescindirlo.

Este es el contrato que se hace, se dice. Mientras tanto el proyecto no lo deshace; el proyecto contiene una obligación, que obliga eternamente a los contrayentes, que no les deja libertad; por el cual si un hombre ha prometido amor a una mujer, tiene que amarla siempre.

Sin embargo es imposible obligar a la voluntad. Nadie puede decir: mañana amaré lo que amo hoy. Una mujer que es bonita hoy, mañana puede ser fea; una mujer que hoy es honrada, honesta, mañana no se sabe lo que será. Si un hombre ama a una mujer por pura, por honesta, por bella, y después desaparece todo esto, la causa de la obligación ha desaparecido también. No se ha detenido el señor senador en dar alguna explicación sobre esta inconveniencia: suprimir el divorcio y desconocer el carácter religioso del matrimonio, es una anomalía insostenible.

Entonces quiere decir que el proyecto ni es humano; es que se queda muy corto, muy atrás.

La lógica debe decir: no señor. Casamiento libre; perfectamente, ¡que sea! Uno dirá entonces: dentro de un año lo desharé; otro dirá: dentro de un mes, y a los ocho días nos casamos otra vez. ¡Estamos bien! (*Risas*).

Perfectamente, libre; pero cada uno según sus creencias. El que crea que es zulú, que se case a su modo; pero déjennos a nosotros; no no nos vengan a tratar peor que a zulúes.

En Italia, en España, se han notado inconvenientes, porque una joven honesta, virtuosa se casa y luego el marido no quiere respetar el vínculo, y, ¿cómo queda? Esto ha sucedido en Europa mismo.

Si una joven que solamente se ha casado civilmente sostiene ante los tribunales que con sólo el acto civil no se considera casada; que así se lo enseñan y se lo mandan los preceptos de su religión, y que ningún poder sobre la tierra la obligará a vivir en un estado que para ella no es sino un comercio criminal, ¿qué se podría responder a ese grito imperioso de la conciencia y qué recurso nos ofrecerá la ley? ¡Ninguno! La nulidad del matrimonio, dice Bressolles,

si nos guiamos por los principios que rigen los contratos.

Un contrato se deshace fácilmente; y entonces, hicimos un contrato y ahora lo deshacemos; ¡quedamos en paz!

El Poder Ejecutivo dice que el matrimonio es indisoluble. ¿De dónde saca esta ciencia, esta autoridad? ¿Es Papa? ¿Es concilio? (*Risas*). La toma del Evangelio, porque no se puede negar el tributo al «cristianismo»; porque el cristianismo es monógamo, y dijo: te casarán con una sola.

Ya que el señor senador nos citó el *Génesis*, debe acordarse que el *Génesis* dice: que Dios creó un hombre y una mujer; esa mujer fué la perfección del mundo. Había estrellas, yerbas, astros, el hombre soberano; todo estaba bueno; pero faltaba algo: le faltaba la mujer, y cuando Dios formó a la mujer se completó el mundo al crear esa criatura de pureza que no tiene fuerza, pero arrastra, seduce y domina con sus virtudes y con su belleza. Esa es la mujer. Y Adán, cuando despertó, según el *Génesis*, dijo: ¡Ah! ¡esta es carne de mi carne!

«Por ésta, dijo el Evangelio, *dejarás a tu padre y a tu madre*»; pero sólo los dejarán una vez, y no los dejarás todos los días; (*risas*) porque si todos los días se van a estar casando... ¡estaría adelantada la civilización!

Digo esto, señor presidente, porque el proyecto, con toda la buena fe del señor ministro, bajo las hojas de rosas deja ver la cabeza chata y negra del áspid; viene el «divorcio». Sí, señor presidente; este proyecto sin intención no va a poder evitar los males que amenazan y va a herir la fibra más delicada, a la parte más pura de la sociedad: la mujer. Sí, señor presidente; para medir esas consecuencias no hay más que ver el papel que por esa ley desempeñará la mujer; va a ser una sierva, un instrumento de capricho, de placer, como en Turquía y Asia, y no la soberana que domina con sus méritos e inspira con sus virtudes.

¿Qué se quiere con este proyecto, señor presidente?

América del Norte nació a la libertad sin pasar por las tinieblas de la infancia y pudo llegar a la edad viril rica de la experiencia y razón de la humanidad. Sus progresos eran admirables, porque tenía a Wáshington, que se recibió de la presidencia jurando sobre la *Biblia* su fidelidad a la Constitución; pero sobre la frente de la gran República se divisaba una mancha... ¡la esclavitud! ¡Ah! era una mancha, un cáncer que amenazaba disolver esa nación

ilustre. ¿Y los hombres? Los hombres tenían que ocuparse de sus negocios.

Entonces se reunieron las mujeres. Nueve Estados mandaron comisionadas; setenta y una delegadas se reunieron el año 37 en New York. ¿Qué acordaron? ¿Ocurrir a los hombres? No, los hombres algunas veces son insensibles. Entonces, ¿qué hacer?

El primer artículo de la convención imponía a las mujeres americanas orar, rogar a Dios para que tocara el corazón de los hombres y los hiciera sensibles al Evangelio. Así, todas las noches y todas las mañanas cada marido veía a su esposa rezando de rodillas. ¿Por quién? Por nuestros hermanos los negros.

Ya hemos visto después el serio peligro que corrió América, y hemos visto que se han realizado los votos de las mujeres.

Y aquí, ¿qué sucederá, señor presidente, cuando la ola de incredulidad, de irreligiosidad — no quiero emplear otro término — se desborde; cuando veamos que la moral se laxa, que desaparece la buena fe y se sientan los desastres económicos y políticos?

Entonces, yo espero que las madres, que las esposas, a quienes debemos nuestra felicidad, confío que han de pedir a Dios que suavice el corazón de los hombres, que despierte en ellos los elevados sentimientos de honor y lealtad.

«La moral de los sexos, dice mister Taine, parece muy pesada a los hombres de placer...; a todo ese mundo galante y libertino, para quien la irregularidad ha venido a ser la regla. Nuestras gentes alegres y ligeras (de *bon air*) adoptan sin dificultad una teoría que justifica su práctica. Les será agradable saber que el matrimonio es un convenio, una «preocupación». Aplaudirán a Saint Lambert, cuando en el banquete, levantando un vaso de champaña, brinde por volver a la naturaleza y a las costumbres de Otaïti.»

Parece que los otaítianos no aprecian mucho el matrimonio.

En fin, creo que este proyecto no tiene objeto alguno; por eso el único punto en que he disentido lo he puesto de manifiesto salvando los demás inconvenientes.

Al oponerme en general al proyecto, quiero mostrar que no es mi ánimo negar facilidades para el matrimonio a los que se dicen que no las tienen; porque soy liberal, verdaderamente liberal, quiero que todos sean libres. Digo con Montalambert: «Vosotros no más queréis ser libres; vosotros no más queréis predicar; dejadnos ser libres; dejadnos predicar a nosotros también.»

Un jefe teníamos en la República vecina que se llamaba jefe del Partido Liberal; pero disponía de todas las rentas y autorizaba a cualquier comisario rudo de la plebe para que hiciera bajar del púlpito a un sacerdote cuando creyese que predicaba contra el «gobierno».

No quiero que lleguemos a este caso.

Oigo decir que es mejor separar la Iglesia del Estado.

¿Cómo? ¿Va a renunciarse el Patronato? De ninguna manera. Con este nombre, o bajo cualquiera otra forma, el gobierno evitará que venga un obispo revolucionario, discolito. ¿Qué resta de la mencionada separación? ¿Será que neguemos el dinero para la construcción de templos?

Lo hemos de dar voluntariamente movidos por la opinión. Se dice que el Estado debe emanciparnos? ¿Vamos a crear una Iglesia argentina? ¿Y quién va a ser el Papa? Tendríamos que ver a un presidente papa y a los ministros obispos.

No puedo desear eso francamente. Se consideraría ominoso, y soberanamente ridículo.

Voy a entrar a un terreno práctico.

Alguna vez se ha dicho «que eso es bajo». ¿Qué es bajo inclinarse a quitar la piedra del camino?

Ninguna verdad se puede desear de la ciencia, o del arte.

Todo lo que es verdaderamente útil es noble, señor presidente.

Se dicen que los curas explotan, y que no casan a muchos porque esos muchos son pobres. Señor, conozco a muchos sacerdotes que podría nombrar, en Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y en esta Capital. Conozco hombres que, a la media hora de conversar con ellos, no se puede resistir al influjo de sus virtudes evangélicas.

Estoy hablando como católico y como argentino, y ¿por qué no he de manifestar la verdad ante el Honorable Senado?

Dice Macaulay, que «una sola de las órdenes religiosas del catolicismo, puede presentar tanto número de hombres distinguidos por su ciencia y virtudes como todos los protestantes.» Se ve, pues, que no hay motivo para condenar con esa generalidad a los curas.

Ya sé que hay algunos que faltan a su deber, que explotan al pobre, que oprimen. Realmente. Pero, esto tiene su remedio, siempre que nuestro gobierno procurase hacer algo, en armonía, sin violencia. Estoy cierto que la autoridad eclesiástica no se habría de resistir a toda medida que fuera racional. Así en Francia y demás naciones se celebraron concordatos.

Pero, vamos a esto, a lo positivo. ¿Por qué

no les asignamos sueldo a los curas? ¿Qué le costaría a la Nación? Nada. Lo que se les dé, podrían devolverlo, los particulares, en caso necesario, por medio de un pequeño impuesto.

Pongámosle, pues, un sueldo a los curas, y entonces el pueblo no será explotado, se casarán todos sin dificultades de ningún género.

Es necesario, señor presidente, respetar el vínculo. El que no es católico puede creer lo que le parezca; pero nosotros los fieles creemos que se debe cumplir con los preceptos de nuestra fe.

Por mi parte, he procurado aprender: siempre temo equivocarme en algo: hago lo que puedo.

Pero, voy a contraerme a probar que no conviene el proyecto de ley que se discute, que no es oportuno. Más: ahí presento uno en substitución; es una forma que trata de salvar los inconvenientes del de la Comisión en mayoría; quedan asegurados los derechos de los católicos, dejando a los que no lo sean, la libertad de casarse en la forma que se determina.

—Se lee:

Quedan modificadas las disposiciones del título 1º, sección II, libro 1º del Código Civil, en la forma que se expresa en esta ley.

Sección II, de los derechos personales en las relaciones de familia, título I del matrimonio.

Artículo 1º — Corresponde a los tribunales eclesiásticos exclusivamente, las causas matrimoniales que afectan el vínculo del enlace contraído entre católicos. Todos sus efectos civiles se regirán por el poder civil.

Art. 2º — Para reconocerse válido en juicio el matrimonio, es indispensable que sea inscripto en el registro público.

Art. 3º — Los que no fuesen católicos podrán contraer matrimonio en conformidad a las prescripciones siguientes:

(Siguen las disposiciones del proyecto de la mayoría de la Comisión).

Sr. Presidente. — Se reservará para el caso de ser rechazado el de la mayoría de la Comisión.

Sr. Funes. — Quiero hacer notar que por el código actual, artículo 211, no puede haber separación de bienes si no hay previa sentencia de divorcio; sentencia que la pronuncia el eclesiástico. Por el proyecto que presento, queriendo evitar toda dificultad, no es necesaria tal sentencia; el juez civil entenderá en ello: en todo lo que se refiere a separación de bienes, tutela, herencia, etcétera.

Voy a decir dos palabras para concluir.

El sabio profesor de Ferrara, Januzi, dice: «Es de lamentar que el código italiano haya tomado del francés, para la reglamentación civil, la fórmula francesa que atribuye al Estado, por medio del funcionario secular, la potestad exclusiva de dar vida jurídica al matrimonio; no reconociendo otro enlace que el de su intervención, usurpa un poder que no le pertenece, obliga al ciudadano a obrar en contra de su razón objetiva; e invadiendo de esta suerte el dominio de la conciencia, destruye el fundamento mismo de la libertad».

El doctor Vélez Sársfield, señor, que supongo no le dirán clerical, ultramontano; hombre eminente, lo he tratado mucho y he conferenciado varias veces con él sobre esta materia, nos legó en sus escritos estas palabras, que no pueden ser más oportunas: «Las personas católicas como las de los pueblos de la República Argentina, no podrían contraer el matrimonio civil. Para ellas sería un perfecto concubinato, condenado por su religión y por las costumbres del país. La ley que autorizara tales matrimonios en el estado actual de nuestra sociedad, desconocería la misión de las leyes, que es sostener y acrecentar el poder de las costumbres, y no enervarlas y corromperlas». (Eso creo que haría este proyecto). «Sería incitar a las personas católicas a desconocer los preceptos de su religión, sin resultado favorable a los pueblos y a las familias.

«Para los que no profesan la religión católica, la ley que da al matrimonio un carácter religioso no ataca en manera alguna la libertad de cultos, puesto que ella a nadie obliga a abdicar sus creencias: cada uno puede invocar a Dios en los altares de su culto. El resultado que ha producido en Francia la ley de matrimonio civil, nos demuestra que el Código Napoleón no ha hecho sino obligar a católicos y protestantes a contraer dos matrimonios: el civil y el religioso.

«Sólo los que no profesan religión alguna pueden satisfacerse con el matrimonio civil.» ¡Es natural, hacen alarde de no profesar ninguna!

Como he dicho, yo presento una forma que da completa libertad y facilidad a los que no las tenían, y al mismo tiempo deja a los católicos tranquilos en sus derechos.

El matrimonio, señor presidente, es la base de la familia; la familia es la base de la sociedad. Atacar la familia es atacar la sociedad; atacar la sociedad es conspirar contra la libertad.

Yo que he defendido, señor presidente, la libertad del negro, la libertad de la enseñanza, la libertad del inmigrante, considero un deber sagrado defender, en este recinto, la libertad del matrimonio.

He dicho.

Sr. Pizarro. — Pido la palabra.

He oído, señor presidente, a la mayoría y a la minoría de la Comisión. Me ocuparé sólo de la primera, que en su informe reproduce en el fondo, ya que no en la forma, las consideraciones del mensaje con que el Poder Ejecutivo acompaña este proyecto.

Yo no puedo, señor presidente, asentir en manera alguna a las falsas teorías de la Comisión y del Poder Ejecutivo en esta materia, como no puedo adherir con mi voto a la sanción del proyecto que se discute. Esas teorías son subversivas de todo el régimen institucional de la Nación, como este proyecto se manifiesta, clara, evidente, palmariamente inconstitucional, a tal punto que bien podría tolerarse la sanción de la ley que se proyecta, bien seguro que no habría tribunal argentino que pudiera dejar de declarar su inconstitucionalidad.

Se comprende, entonces, que yo no pueda votar este proyecto, ni adherir a las consideraciones de carácter constitucional con que se pretende justificarlo.

Este proyecto, señor presidente, es contrario al dogma social de las naciones, es contrario al dogma político de las democracias.

Este proyecto es contrario al dogma de la existencia de Dios; es contrario al dogma de la soberanía de los pueblos.

Este proyecto es contrario a la razón y a la libertad humanas; este proyecto es una institución de fuerza; es una institución de la fuerza. Este proyecto es una institución marcial, es una institución militar, es una institución de opresión y tiranía, es una institución de guerra en la República; es una institución de guerra social en ella.

Este es el carácter de esta institución, este su origen, esta su historia en todas las naciones en que ha sido implantada; esta es su naturaleza íntima, este el genio de la institución que se pretende importar y establecer en la República.

Este proyecto es por lo tanto evidentemente inconstitucional; él es contrario a los principios fundamentales de la Constitución; él es contrario a sus altos fines morales, políticos y sociales; es contrario al espíritu y al texto literal de la Constitución.

Yo espero demostrar todo esto, señor presidente; pero antes yo quiero decir dos palabras de excusa a mi distinguido amigo el señor doctor Posse, autor inmediato del proyecto.

El señor doctor Posse sabe bien cuánta es la estimación personal con que le distingo, y cuán elevado concepto me merecen su patriotismo, su talento indiscutible y su ilustración notoria. Yo tengo presente, en este momento, señor presidente, lo que espero no olvidaré jamás, y que mi distinguido amigo me recordaba hace pocos días en presencia del señor miembro informante de la mayoría de la Comisión, es decir, las consideraciones con que su bondad ha querido favorecerme desde los primeros días de mi juventud y con que en todo tiempo ha favorecido a los míos. Yo me considero feliz, señor presidente, de poder en este momento descargar en parte el peso de esta deuda de gratitud, dando al señor doctor Posse este testimonio público de mi reconocimiento, de mi estimación y de mi respeto.

Pero el señor ministro de justicia y culto ha ido muy lejos con este proyecto, pretendiendo quitar al matrimonio su carácter religioso y convertirlo en una mera institución jurídica, en mera institución civil.

Tratando de encerrar este pensamiento en una fórmula legislativa que realice el propósito tenaz y persistente del presidente de la República, manifestado por vez primera en las pasadas sesiones del Congreso, el señor ministro de justicia y culto ha tomado sobre sí una tarea superior a sus fuerzas, ha contraído un empeño superior a todo esfuerzo humano, y ha debido necesariamente sucumbir en la empresa.

Ha debido escollar en ella, señor presidente, porque no es posible eliminar de las leyes los principios fundamentales del mundo moral; ni es dado al ingenio humano más esclarecido substituir con leyes de artificio, con leyes de combinación y de un eclecticismo imposible como el de este proyecto, los principios fundamentales, las leyes providenciales e inmutables del orden social.

Esto importa precisamente, señor presidente, el proyecto que se discute; proyecto radicalmente «socialista», fundamentalmente contrario a los principios trascendentales de la moral, de la legislación y del derecho, de la filosofía, de la historia, de la política de la «ciencia social» en fin.

De aquí procede, señor presidente, que este proyecto sea manifiestamente contrario a la Constitución nacional; de aquí procede que este proyecto sea nugatorio en su esencia, como lo ha hecho notar ya el señor miembro informante de la minoría de la Comisión; de aquí procede

que sea contradictorio en sus términos, nugatorio en sí mismo, y que no corresponda como espero demostrarlo, ni a los propios motivos o fundamentos de razón, ni a su mismo objeto institucional que sólo aspira a realizar parcialmente, pues no desarrolla todo el sistema de la institución, ni deduce todas las consecuencias que se desprenden de las premisas que él establece respondiendo por completo a su objeto institucional a su objeto trascendental de reforma social, a su objeto de reforma en las costumbres públicas, en la moral pública, como en la moral privada, en las costumbres y en la moral de la familia y de la sociedad; a su objeto antisocial de eliminar de ellas la influencia del principio religioso, en la vida pública como en la vida privada, en la legislación y en el derecho público y privado de la Nación.

Este proyecto funda así, un eclecticismo constitucional y jurídico imposible, y que no responde a ninguna de las escuelas de la legislación y del derecho de las naciones, a ninguna de las escuelas en que fundamentalmente se divide el campo de la cuestión social que ahora se trae al debate.

De aquí procede el carácter contradictorio del proyecto. El señor ministro ha pretendido reunir los extremos, cambiando la naturaleza misma de las cosas, y no ha logrado alcanzar a la meta de sus aspiraciones eclécticas, porque no es posible modificar la naturaleza de los seres, desnaturalizar el matrimonio, desnaturalizar la sociedad y el hombre mismo, despojándolos de su carácter religioso y moral, despojándolos de su carácter racional y sociable, para hacer de la primera y principal de las instituciones sociales, de las instituciones morales, una institución, como el señor ministro pretende, puramente jurídica, una institución puramente civil, es decir, una pura institución de la «fuerza» que es el principio informativo de las relaciones meramente «jurídicas», que es el principio informativo de las instituciones puramente «civiles», cuya base es el «imperium», esto es, la coacción, la coerción, «la fuerza»!

La «fuerza», señor presidente, «la fuerza material» la fuerza «militar»!

Este es, precisamente, el carácter de las constituciones o leyes puramente civiles, de las leyes sin autoridad moral, sin sanción social, y que carecen de base en la opinión y en las costumbres públicas. El señor ministro no ha podido desnaturalizar la institución que trata de implantar entre nosotros, y ha tenido que conservarla con su naturaleza y carácter propio, como una institución «de la fuerza», que es el

carácter con que por vez primera apareció y con que se presenta en todas partes del mundo.

El señor ministro sabe bien, el Senado lo sabe, todos sabemos, lo que es el «imperium» en la legislación civil de las naciones. Todos sabemos lo que significan estas voces, «imperium, imperari, imperator». Ellas expresan una institución de guerra, una institución de fuerza, una institución militar. Ellas designan, comando militar, autoridad militar, coacción, coerción, fuerza!

Es esta una institución del poder social en los pueblos para la defensa del orden social en ellos. Todo aquel que infringe las leyes fundamentales de la sociedad o de la patria, se declara en guerra con la Nación o con la sociedad; ha salvado las barreras que contra él levantan la moral social, la conciencia pública, la opinión nacional, la estimación y el respeto debido a su autoridad y a sus leyes, y se constituye así enemigo de la sociedad o de la patria; en guerra con ellas, no queda otro remedio que someterle por medio de la «fuerza militar» con que se contrarresta la fuerza que él hace a la patria o a la sociedad.

Entonces la «fuerza militar» viene en defensa de la Nación, o de la sociedad civil y es una institución protectora del orden público o social de la Nación.

Pero esta institución, señor presidente, compañera y auxiliar como es de la soberanía política y social de las naciones; esta institución que sirve para rechazar al enemigo de nuestras fronteras como para obligar al deudor tramposo a pagar sus deudas o al criminal a respetar el orden moral y social, puede en mano del poder público convertirse en instrumento de opresión y tiranía, en arma de guerra contra la patria o contra la sociedad misma; puede convertirse en instrumento de fuerza y de violencia contra el pueblo; puede convertirse en elemento hostil a la voluntad nacional, y emplearse para sojuzgar sus libertades públicas, su derecho establecido en el orden político o en el orden social.

Esto es lo que se verifica hoy, tanto en el orden político como en el orden social que afectan el proyecto de ley en discusión, el cual como institución «puramente civil», inviste un carácter evidente de fuerza, y como institución de orden social es una institución de violencia social, una institución de opresión y de guerra social, una institución enemiga de la opinión nacional, del voto nacional, de la voluntad nacional, de las costumbres nacionales, de la historia, de las tradiciones, de la religión nacio-

nal; de la Constitución y de sus leyes políticas y civiles, que son, así, subvertidas en un solo y mismo acto legislativo, sin autoridad moral en las costumbres, sin sanción social en la voluntad soberana de la Nación.

¿Cuál será, así, el principio informativo de esta ley, sin autoridad moral, sin sanción social? Únicamente el de la fuerza. Este es, repito, el carácter de las instituciones meramente jurídicas, y este es por su naturaleza, por su índole, por su origen, por su historia, por su género, el carácter de la institución del matrimonio civil, o de la institución meramente civil del matrimonio.

El Senado de la Nación no puede dar a la República esta ley, diciendo como decían nuestras asambleas patrias, allá en los pasados tiempos de la independencia y del honor nacional, allá en los pasados tiempos del patriotismo y de la libertad política, que ella daba «en nombre y por autoridad de los pueblos que representamos». Los pueblos que representamos están bien lejos de sancionar esta ley con su opinión y con su voto, y el Senado al sancionarla tendrá que invocar otro principio que el de la soberanía nacional, y tendrá que decir que ella es dada en nombre y por autoridad de la soberanía que ejercemos, substituyéndose así a la voluntad de la Nación, que habrá de someterse a «esta voluntad soberana», quiera o no quiera.

De esta suerte, señor presidente, habremos fundado y constituído el derecho de los Césares, o de autocracia, para decir que la ley es la voluntad del que manda, *quod principi placet legis rigorem habet*, sin que podamos decir con Montesquieu y su escuela que la ley es la expresión de la voluntad general de la Nación, sin que podamos decir que la ley es la expresión de sus costumbres sociales, de su moral pública, de su fe religiosa, de sus tradiciones patrias: que la ley es la expresión de todo eso que constituye el hombre, el pueblo, la Nación, el nombre argentino! (*Aplausos*).

Señor presidente: yo tengo hecha en esta Cámara, pública profesión de mi fe política y de mi fe religiosa. No me avergüenzo de decirlo sino que, por el contrario, hago de ella un título de honor y noble orgullo: soy hombre de mi época y pertenezco a la más alta y enluminada civilización del mundo en el pasado, en el presente y en el porvenir de las naciones: la civilización cristiana.

¡Soy argentino y soy cristiano!

Por la gracia de Dios soy cristiano, católico, apostólico, en comunión con la Santa Iglesia

Romana, cuya salvadora y sabia influencia quisiera desterrar del pueblo argentino el señor miembro informante de la Comisión en mayoría, sin duda para extinguir en él la luz de la civilización moderna y que se extiende sobre él la noche del terror y del crimen, que pesasen como una maldición de Dios sobre esta pobre y desgraciada patria!

Soy cristiano, católico, apostólico, en comunión con la Santa Iglesia de Roma, señor presidente, como soy liberal, republicano, democrata de conformidad y bajo los auspicios de la Constitución nacional!

Creo en la libertad, señor presidente, porque creo en Dios. Sin esta creencia en Dios, mi dogma social sería la «fuerza», y su fórmula política probablemente el «despotismo» o lo que es lo mismo, la «autocracia» como más conforme a la naturaleza del supuesto dogma.

No está en mis manos, señor presidente, cambiar los términos de la cuestión que ahora se trae al debate; no está en mis manos cambiar los términos de la cuestión social que se agita en estos momentos y que gira entre estos dos extremos: Dios, la razón, el alma, el espíritu humano, emanación de Dios, la libertad humana, manifestación del alma espiritual del hombre, manifestación del espíritu humano en la vida social; o bien la materia increada y eterna; la fuerza, manifestación de la materia en la naturaleza; el instinto, manifestación y transformación de la fuerza en las relaciones de una vida puramente animal.

Tales son los extremos y los términos precisos de la cuestión que ahora se trae al debate, señor presidente. En torno de esta cuestión se agitan y revuelven en el terreno de la cuestión social: existencia de Dios, origen del hombre, leyes de su desenvolvimiento, principio constitutivo de la sociabilidad humana, religión y moral de las naciones, origen del poder social, soberanía de los Estados, constituciones o leyes políticas para el gobierno de las sociedades humanas, principio informativo de su derecho público y privado, de su derecho interno y externo, es decir, de sus relaciones sociales internas y externas, en una palabra, principio informativo de su civilización!

Este es, señor presidente, el carácter de la grave cuestión que ahora se trae a la consideración del Honorable Senado. ¿Hay patriotismo en suscitara? ¿Hay prudencia, hay sana política en provocar este género de cuestiones, y de promover en la República innovaciones tan trascendentales y peligrosas como la que se proyecta por el Poder Ejecutivo? Mi juicio

será sin duda juzgado parcial y apasionado; soy de la oposición al actual gobierno; pero, yo digo sinceramente, que no hay prudencia ni patriotismo en provocar tales reformas y en suscitara este género de cuestiones.

Esta reforma no responde a ninguna necesidad social; ella ha tenido en todas partes un móvil diferente que expresaré más adelante.

Pero, lo diré ahora mismo, señor presidente: este es un medio de imponerse a los pueblos y nada más.

La institución del matrimonio civil, considerada bajo su aspecto filosófico, es una concepción revolucionaria — el Senado lo sabe bien — abortada entre el delirio y frenético tumulto de las fiestas que Robespierre denominó «las Saturnales de la razón humana».

El Senado sabe cuál fué el origen de estas fiestas y el objeto de su institución, en medio de la sangrienta guerra social del siglo pasado en Francia.

Como lo quiere hacer aquí el señor miembro informante de la mayoría de la Comisión y lo pretende el proyecto en discusión, se trataba de eliminar en Francia la influencia de la Iglesia católica en la vida social de la República; se trataba de «desacerdotizar» Francia, de *depretiser la France* como se decía entonces. La sociedad que no puede vivir sin religión ni culto público ni en sus días de locura y desvarío, necesitaba una religión y un culto público, en que no hubiese clero, ni Dios, ni frailes, ni religión, ni ministros del culto; y esta es la religión y el culto cívico de la razón en la Revolución Francesa. Era necesario echar fuera todo lo existente y eliminarlo todo; era necesario revolucionar la sociedad hasta en sus principios o bases fundamentales. Era necesario negar la existencia de Dios y fundar en el orden social las teorías de las sectas materialistas, positivistas, socialistas con todas las innovaciones que traen al terreno de la cuestión social.

Así comienza, pues, como idea filosófica, la del matrimonio civil o puramente jurídico. Ella viene como consecuencia de la negación de Dios y de un culto cívico nacional, hecha abstracción de la divinidad. ¿Quién bendeciría entonces la unión conyugal? Nadie. Ella pasaría a la categoría de los actos puramente jurídicos y de fuerza, en la nueva sociabilidad, cuyo principio informativo era la fuerza de la materia en una vida puramente animal.

Era lógico y necesario, entonces, que el oficial público; el representante de la fuerza y

del poder social, fuese el único sacerdote que bendigiera en adelante la unión conyugal.

Tal es el origen de esta institución bajo su aspecto filosófico. Como institución del derecho, ella nació bajo el imperio de Napoleón, el hombre de la fuerza militar, el genio de la regla en nuestro siglo.

Ella es así una institución del derecho imperial, fundada por un déspota laureado, cuya gloria admira, fascina, pero no se hace amar, porque es la más alta expresión del personalismo, del individualismo, del egoísmo; la más alta expresión de todo aquello que relaja el vínculo de la sociabilidad y constituye el principio de unión social en las naciones.

Nació al influjo de un déspota glorioso, que ha derramado a torrentes la sangre y los canales de la noble Francia, únicamente para su exaltación personal y con fines de gloria militar y de ambición dinástica.

Tome en cuenta el Honorable Senado el carácter de esta institución, su tendencia, su modo de manifestarse, la manera como obra sobre los pueblos, y sobre las sociedades, y observe cómo se ha establecido en Francia y fuera de ella.

En Francia mismo esta institución ha vivido siempre vida efímera, sin conseguir arraigar jamás en las costumbres públicas. Ella no ha conseguido echar raíces ni en la tierra misma de su origen, y hoy vive adherida al texto árido de la ley, que la matiene en nombre sólo de la fuerza.

Este es el principio de la vida de esta institución, planta exótica de la legislación y del derecho de las naciones, parásito que sólo vive de la fuerza que le da la ley, que le da la voluntad prepotente del que manda: la voluntad soberana del legislador. Ella no arraiga en las costumbres públicas, no encarna en la moral de las naciones y no será jamás una «institución social» que dé carácter al matrimonio, como no lo ha sido en parte alguna del mundo después de un siglo de su institución en Francia.

Por eso vive vida efímera en todas partes, señor presidente, y apenas si ella ha sido violentamente implantada en algunas naciones después de un siglo de existencia en el mundo. Nació en Francia bajo los auspicios del despotismo, y así aparece en las riberas del Plata, fundada ayer en su ribera oriental, bajo un despotismo militar, y pasa a la ribera occidental, señor ministro, pasa en una época triste para la República!

Señor presidente: el Poder Ejecutivo y la Comisión presentan este proyecto como una ley de libertad. Después de lo que dejo expuesto, sabemos qué libertad en esa de que nos hablan el Poder Ejecutivo y la Comisión.

Es la libertad que el emperador Napoleón fundaba con el peso de sus armas en el continente europeo, cuando convertía en reino una república, cuando fundaba una nueva dinastía, o cuando daba una nueva carta constitucional a los pueblos subyugados. Pero, no es esa otra libertad que el ciudadano Jorge Washington fundaba en tierra americana con el peso de su autoridad moral y de sus virtudes cívicas, con el ejemplo de su respeto a la Constitución y a la soberanía nacional, con el ejemplo de su honradez política y administrativa en el gobierno de la gran República.

No es esta ciertamente la libertad de que se nos habla y que por vez primera trae esta ley al suelo argentino. Esta institución, señor presidente, habría sido un anacronismo con Rivadavia y con Posadas; habría sido un anacronismo con Urquiza o Derqui; habría sido un anacronismo con Mitre, con Sarmiento, con Avellaneda, con Roca mismo en el primer período de su gobierno. ¡Esta institución no nace, señor presidente, sino sobre el sepulcro de la libertad política de los pueblos!

Por eso no ha podido el señor ministro tener éxito en este proyecto que yo habré de considerar únicamente en su idea fundamental, porque me son indiferentes y reputo de escasa importancia sus detalles.

Sr. Presidente. — Si el señor senador estuviera fatigado, podríamos pasar a cuarto intermedio.

Sr. Pizarro. — Acepto y agradezco la invitación del señor presidente.

—Así se hace, continuando pocos momentos después la sesión.

Sr. Presidente. — Continúa con la palabra el señor senador por Santa Fe.

Sr. Pizarro. — Me disponía a estudiar brevemente, señor presidente, el proyecto del Poder Ejecutivo en sus ideas fundamentales y en el sistema de la nueva ley del matrimonio que se prepara a la República y decía que el señor ministro había escollado en este proyecto, porque tratando de cambiar la naturaleza de las cosas, la naturaleza íntima del matrimonio, la naturaleza moral misma de los seres que lo realizan, había tomado sobre sí una tarea verdaderamente imposible; lo cual me propo-

nía demostrar con el estudio mismo del proyecto en sus artículos principales.

Estos son a la verdad muy pocos, pues prescindiendo del que se refiere a los impedimentos dirimentes del matrimonio, de los cuales el proyecto excluye el impedimento de orden sagrado y algún otro de la ley canónica, todo el sentido y la importancia del proyecto se condensa en los artículos 50, 55 y 58 que dicen así:

«Artículo 50. — Los futuros esposos «pueden libremente casarse con arreglo a los dictados de su conciencia»; pero el matrimonio «no se reputará legalmente celebrado» a los efectos civiles, mientras no se inscriba en el Registro Civil, de conformidad a las disposiciones de este título.»

«Artículo 55. — La ley «no reconoce» más matrimonio, a los efectos civiles, que los que consten en los registros públicos, con las formalidades que quedan establecidas.»

«Artículo 58. — «Si se hubiese celebrado matrimonio religioso» y alguno de los cónyuges rehusase inscribirlo en el Registro Civil, el otro cónyuge «tendrá acción» para compelerlo a la inscripción. Si, ordenada la inscripción, fuese resistida, «se hará por el juez en nombre del que lo resiste y producirá todos los efectos legales.»

Desde luego, señor presidente, la contradicción es manifiesta y palmaria en el sistema de la ley, y basta leer los artículos que he citado para convencerse de ello.

Comparando el artículo 58, que da acción a uno de los cónyuges a compeler al renuente a la inscripción del «matrimonio ya celebrado» y legalmente «existente», con «efectos civiles», pues confiere «acción civil» a uno de los cónyuges para obligar al otro a la inscripción, se observa que la ley «reconoce el matrimonio religioso», y por más que afirme que no produce «efectos civiles» y que «no reconoce otros matrimonios» que los que «consten en el Registro», debiendo aquéllos «reputarse como no celebrados», esto no es de modo alguno así, pues la ley los reconoce «antes de la inscripción» y les acuerda «efectos civiles» aun antes de que esto se verifique, y lo que es más todavía, aunque «no se verifique».

La ley reconoce, pues, el matrimonio «religioso» como verdadero y legítimo matrimonio, que produce efectos civiles y da acción civil, que se puede deducir ante los tribunales de justicia, fundando «un derecho civil» que emana «del estado» que el matrimonio religioso crea y constituye por sí mismo antes de la inscripción.

Este matrimonio es, pues, en concepto de la

ley que se proyecta, un acto jurídico válido y eficiente según expresa disposición del citado artículo 58, y no se puede decir con el artículo 55 que la ley «no reconoce» otros matrimonios que los que «consten en los registros públicos», y mucho menos con el artículo 50, que los matrimonios religiosos «no se reputarán legalmente celebrados» mientras no se inscriban en el Registro Civil.

La consecuencia lógica de lo establecido en los artículos 50 y 55 del proyecto sería que el cónyuge renuente no podría ser en manera alguna obligado a la inscripción, por cuanto en ellos se establece que no hay acto jurídico válido, que no hay acto que produzca acción civil que pueda entablarse en justicia. De tales artículos se desprende, con toda evidencia, que cuando el matrimonio ha sido celebrado únicamente *in facie ecclesiae*, o antes los altares del culto disidente cuando los esposos profesaren este culto; tales matrimonios «no existen» a los ojos del tribunal ni de la ley; no hay «derecho civil» que pueda fundarse en ese hecho legalmente insubsistente; no hay acción que proceda de aquel acto que la ley «reputa» jurídicamente insubsistente y nulo y que, por lo tanto, es ineficaz para fundar en él una acción en derecho civil, pues acto de tal naturaleza no produce «efectos civiles».

Tendríamos así que según el artículo 58 del proyecto en discusión hay un «efecto sin causa» legal que lo produzca, lo cual es un absurdo manifiesto, contrario a todos los principios de la legislación y del derecho universal de las naciones.

Resulta de aquí que los esposos, aunque casados, no serían casados, si alguno de ellos no se presenta reclamando la inscripción, o mientras no se presente reclamándola.

Semejante matrimonio no podría invocarse como un impedimento para la celebración de un segundo, tercero o cuarto matrimonio.

Los esposos, aunque casados, no serían casados y permanecerían libres para contraer ulteriores nupcias, según el sistema de la ley. Tales matrimonios no constituirían un impedimento dirimente, al tenor del artículo respectivo del proyecto. A pesar de tales matrimonios, podría contraerse otro que, inscripto en los registros, produciría todos sus efectos legales, y dejaría los anteriores sin efecto alguno. Esto resultaría de los artículos 50 y 55, que vendrían a autorizar, así, una poligamia sucesiva que la ley reconoce y desconoce al mismo tiempo, dado el sentido del artículo 58.

Con arreglo a aquellos artículos, forzoso sería decir que la poligamia en esta forma es

permitida y que no hay acción alguna para el cónyuge burlado; con arreglo a este último, forzoso sería concluir que el primer matrimonio, aunque no inscripto en el Registro Civil, es el solo y único matrimonio válido.

En aquel caso la poligamia simultánea o sucesiva es tolerada en la República y queda bajo el amparo de las leyes, como hecho puramente privado y de conciencia; en este otro, la ley desconoce actos de semejante inmoralidad, que ofenden las costumbres públicas y la moral social, declarando insubsistentes los matrimonios ulteriores mediante la acción de uno de los cónyuges del primer matrimonio.

Lo primero hiere al sentimiento religioso del país, es opuesto a su moral pública, a sus costumbres públicas, a su civilización. Cómo podría, entonces, sostenerse jurídicamente aquella situación, ni defenderse una tesis semejante?

Pero, a estar al principio que sirve de base a este proyecto, sería la única verdadera y legal y la única que lógicamente podría sostenerse; mas el señor ministro no ha tenido coraje para romper con las tradiciones religiosas del país, con su moral, con sus costumbres, con su civilización; no ha sabido desprenderse de todo esto que él ha podido en un momento dado llamar preocupaciones, pero que son las manifestaciones irresistibles de la conciencia moral, pública y privada. El ha tenido entonces que ponerse en contradicción consigo mismo y concluir por declarar que ese primer matrimonio, que antes decía no existir legalmente ni producir efecto civil alguno, es un verdadero matrimonio que no puede dejar de producirlos.

Esto importa acordar acción civil a los cónyuges, para compeler al renuente a la inscripción.

Pero, bien; ¿y si el cónyuge renuente se resiste, a pesar de todo, al mandamiento judicial? Al tenor de las teorías desarrolladas por el Poder Ejecutivo en su mensaje y por el señor miembro informante de la Comisión, estaríamos en el caso de decir que se trata solamente de una obligación «ad factum» para hacer escritura, para hacer contrato, para inscribir el matrimonio insubsistente, y que debe celebrarse y efectuarse recién por la inscripción. Deberíamos decir que, resistido uno de los obligados «a casarse», la acción contra el renuente sería de daños y perjuicios al cónyuge damnificado por la falta de escrituración, o inejecución «del hecho» a que se obliga. Este hecho por su naturaleza misma, ni admite ejecución forzada, ni puede ser ejecutado por otro.

El señor ministro para sostener el sistema del proyecto, ha tenido que romper en esto con

todos los principios de legislación universal; ha tenido que ponerse contra su mismo contrato civil, contra su misma ley, y viene a decirnos en el artículo 58, que el juez podrá mandar hacer la inscripción y que sin el consentimiento del cónyuge renuente, quedará después de ella casado.

Pero esto mismo es opuesto al artículo del proyecto en que el Poder Ejecutivo declara que hay nulidad insanable en el acto matrimonial cuando falta el libre consentimiento de los contrayentes. Los términos del artículo a que me refiero son éstos: «Artículo 11. — Es indispensable para la validez del matrimonio el libre consentimiento de los contrayentes».

Luego tendremos que, con arreglo a los principios mismos del Poder Ejecutivo, en este caso habrá matrimonio válido, sin libre consentimiento; y que el matrimonio se impone al que rehusa la inscripción, *manu militari*, mediante una ejecución forzada de la obligación o promesa de contraer matrimonio.

De esta suerte, el matrimonio religioso es mantenido por la ley, que reconoce, a pesar de todo, su existencia legal, antes de la inscripción, y a los efectos civiles de la ley misma que se proyecta contra él.

Este resultado se impone por la naturaleza misma de las cosas, contra la voluntad del señor ministro y del Poder Ejecutivo.

De otro modo, señor presidente, tendríamos esto: que aquí habría un efecto sin causa!

¿Cuál sería la causa que produjera esta acción civil, y los efectos civiles que dejo indicados, y que forzosamente se siguen del acto de la celebración del matrimonio religioso no inscripto en el Registro Civil, si estos efectos no fueran el resultado inmediato de aquel acto legalmente válido?

¿El contrato? ¿El contrato que no existe según el proyecto? ¿El matrimonio religioso que no produce efecto sin la inscripción, según las teorías de la Comisión y del Ejecutivo?

Entonces la razón de semejante disposición es la sin razón: la razón sería simplemente la voluntad del legislador. Sería el caso de decir — *pro ratione voluntas* — porque así lo ordeno y mando: *quia sic volo, sic jubeo*.

Bajo cualquier concepto que se mire este proyecto se descubre, así, su carácter arbitrario: porque así lo quiero; porque así lo mando; porque así lo impongo en fuerza de mi soberana voluntad prepotente en el país; porque así quiero que sea, contra todas las leyes, contra todas las reglas de la legislación; contra todas las leyes del sentido común; contra

la voluntad nacional; contra la voluntad individual del que no quiere inscribir su matrimonio.

Imperium — ¡mando militar!

Pero veamos, por otro lado, este proyecto, examinando la situación inversa.

Mas, antes de esto, hagamos algunas observaciones.

He dicho, señor presidente, — me parece haberlo expresado — que la manera como el señor ministro, mejor dicho, el Poder Ejecutivo, trata de hacer efectivo en este caso el deber de la inscripción, no responde a los principios de la legislación o del derecho civil de las naciones, bajo la fase de los contratos. Preciso sería, entonces, buscar los motivos de la ley, en el caso del artículo 58, en los principios que rigen los delitos del derecho civil y del penal. Tampoco responde a ellos. Si trataría, en tal caso, de dolo, seducción, estupro, — lo que se quiera — y correspondería entonces la imposición de una pena, la indemnización, la pena pecuniaria, cualquiera otra cosa, no la inscripción forzada y la validez del matrimonio.

Pero vamos al artículo 50. En el artículo 58 encontramos un efecto sin causa; en el artículo 30 vamos a encontrar una causa legal eficiente, que sin embargo no produce efectos, a pesar de producirlos y de ser reconocida aquélla como causa legal para legitimar estos.

El artículo 50 dice así:

«Los futuros esposos pueden libremente casarse con arreglo a los dictados de su conciencia».

Poder hacer libremente una cosa, en sentido legal o jurídico; poder libremente casarse según los dictados de la conciencia, es en el sentido de la ley y de la jurisprudencia universal, poder producir acto válido, matrimonio válido, matrimonio legítimo, es poder casarse válidamente; es poder casarse legítimamente y de suerte que el matrimonio produzca sus naturales efectos de ley.

Esto importa el poder casarse libremente, según los dictados de la conciencia; poder producir acto válido con arreglo a la ley, ejercitar un acto autorizado por la misma ley. Por consiguiente, el que se casa con arreglo a los dictados de su conciencia, para la efectividad y validez de este acto no necesita nada más. Este acto debe producir sus naturales efectos de ley; los esposos serán esposos legítimos, y no se les podrá discutir que no lo son, porque ellos invocarán este primer inciso del artículo y dirán: «Nos hemos casado con arreglo a los dictados de nuestra conciencia;

luego estamos legalmente casados». Los términos de la ley son expresos: «Los futuros esposos podrán libremente casarse con arreglo a los dictados de su conciencia».

O este primer inciso del artículo no tiene sentido legal alguno, no tiene sentido racional ni filosófico alguno, ni responde a ningún propósito serio de la ley; o tiene el sentido que acabo de decir.

Y si tiene realmente el sentido y el propósito legal de dar eficacia y validez al matrimonio celebrado según la conciencia individual de los contrayentes; si tiene por objeto reconocer la eficacia o validez del acto, y esto se demuestra, en cierto modo, por la disposición del artículo 58 que es nada más que una consecuencia de esto: ¿cómo es que a renglón seguido se pone esta partícula adversativa «pero» que borra con el codo lo que se escribe con la mano, y se dice: «pero» a pesar de todo, a pesar de existir matrimonio y acto jurídico válido, el matrimonio no se reputará... no habrá... no existirá... o no se tendrá por legalmente celebrado a los efectos civiles, mientras no se inscriba en el Registro Civil de conformidad a las disposiciones de este código?

¡Entienda usted eso!

He nacido de un matrimonio religioso, que no ha sido inscripto en el Registro Civil, ¿soy hijo legítimo, o soy hijo natural? ¿Puedo invocar los derechos propios de mi estado civil nacido de legítimo matrimonio, debidamente autorizado por la ley en la primera parte del artículo que declara válido el matrimonio celebrado por mis padres con arreglo a los dictados de su conciencia? ¿Puedo en este carácter presentarme en sociedad, con esta calidad que constituye mi estado en ella? ¿Puedo en ella ser reconocido y tenido por tal, según las costumbres sociales? ¡Sí!

Pero... se trata de los bienes; se trata de establecer en juicio esta calidad, y de hacer efectivos los derechos que nacen de semejante estado y que la ley misma me reconoce en este carácter, y la ley me dice, a pesar de todo: «no tiene usted derecho alguno»; el derecho de usted «no tiene efecto» ni admite ejecución.

¿Cuál es, ni cuál puede ser la razón de esto? ¿Cuál es, cuál puede ser, vuelvo a decir, la razón jurídica o filosófica de esta disposición de la ley? Porque así lo quiero; *pro ratione voluntas*; porque así lo ordeno y mando; *quia sic volo, sic jubeo*.

Esto, como se ve, no responde a ningún propósito jurídico, a ningún concepto filosófico;

no responde a nada científico o técnico en la materia, y envuelve la más profunda injusticia. Es una ley draconiana, que por la falta de inscripción o de registro de un acto legalmente válido, y que la ley lo reconoce tal, venga hasta en el hijo, hasta en la tercera o cuarta generación, la omisión, el olvido, la falta, la negligencia, la mala voluntad, el delito, dígame si se quiere, de los padres!

¿Se concibe esto con arreglo a las leyes de la justicia civil o la de justicia penal?

El señor ministro escolla aquí como escollaba allí; aquí una causa cuyos efectos se desconocen; allí, efectos cuya causa se ignora. Este es el sistema de la ley que se proyecta; de un lado, efecto sin causa; de otro lado, causa sin efecto.

Esto procede de que el señor ministro ha querido hermanar dos escuelas que se excluyen, y hacer que los extremos se toquen.

Procede de que el señor ministro ha querido hasta este punto violentar la naturaleza de las cosas, y fundar un eclecticismo constitucional y jurídico imposible.

El ha querido no sacar los pies del terreno constitucional, ha querido mantenerse en el terreno de la moral y de las costumbres públicas, ha querido conservarse en el terreno de la escuela espiritualista del derecho, y ha querido al mismo tiempo pasarse al otro lado y fundar un proyecto de ley que corresponda esencialmente a la escuela positivista, incompatible con la Constitución.

Y bien, señor presidente; ¿cómo podría yo adherir a un proyecto semejante, sin una triple apostasía de mi fe religiosa, de mi fe política, y de mi credo científico como modesto alumno de la escuela espiritualista del derecho?

Pero, ¿qué escuela espiritualista, ni qué escuela positivista, si este proyecto no pertenece a ninguna de las dos escuelas, y según se dice, él no corresponde a ninguna escuela del mundo?

Este proyecto no corresponde a nada: es realmente una concepción original y verdaderamente nueva, que por vez primera aparece en el terreno de la legislación y del derecho de las naciones; planta desconocida hasta hoy, cuya clasificación es imposible.

Veamos ahora, señor presidente, si constitucionalmente se puede fundar un proyecto semejante, es decir, si un proyecto de esta naturaleza puede tener algún fundamento en las disposiciones de nuestra sabia, republicana y democrática Constitución.

¡Imposible! *A priori* se puede, desde luego, establecer lo contrario. Este proyecto tiene que ser necesariamente inconstitucional. La Constitución no puede sancionar absurdos de esta naturaleza.

Esta sola observación basta para demostrar que este proyecto es manifiestamente inconstitucional, como lo afirmé al principio de mi discurso.

Voy sin embargo a demostrarlo más directamente, tomando en cuenta las observaciones mismas del Poder Ejecutivo y del miembro informante de la Comisión a este respecto.

El Poder Ejecutivo y la mayoría de la Comisión entiende que las creencias religiosas son del dominio exclusivo de la conciencia individual, y no deben informar el régimen civil del matrimonio. Este es su falso punto de partida y la idea fundamental del proyecto.

La Comisión y el Poder Ejecutivo tratan así, de «constituir» el matrimonio, es decir, «de instituir», de «fundar», de constituir cierta «especie de matrimonio» extraño en la ley a toda confesión religiosa, y común a todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino.

La Comisión y el Poder Ejecutivo encuentran que este proyecto está fundado en el espíritu y claro texto de la Constitución nacional, que garantiza a todos los hombres del mundo que quieran habitar entre nosotros, los beneficios «de la más absoluta libertad», asegurándoles con la libertad de conciencia, el derecho de casarse y profesar libremente su culto.

Este matrimonio extraño a la ley, a toda confesión religiosa, y común a todos los hombres del mundo que quieran vivir entre nosotros, no es, ciertamente, el matrimonio de los ciudadanos, *matrimonium civium*.

No es ni será jamás el matrimonio «de los argentinos» que el proyecto pretende hacer desaparecer, y confundirse en un matrimonio «cosmopolita», y sin nombre, que no corresponde a las tradiciones del país, ni a su historia, ni a sus creencias religiosas, ni a sus costumbres, ni a su moral social; en una palabra, que no es el matrimonio argentino o del pueblo argentino: *quod quisque populus sibi constituit*.

Este matrimonio, señor presidente, este matrimonio sin Dios, sin religión, sin moral, sin sanción social, extraño en la ley a toda confesión religiosa y común a todos los hombres del mundo que quieran vivir entre nosotros, es el matrimonio de la naturaleza: *quod natura omnia animalia docuit*, y no el matrimonio de

los ciudadanos de un pueblo civilizado y cristiano. Es la simple unión genésica de los sexos en el orden natural de los seres vivientes, no en el orden social de las naciones.

Bien, pues; como medio de realizar este patrimonio que la Comisión y el Poder Ejecutivo creen fundado en el espíritu y claro texto de la Constitución nacional, el proyecto del Ejecutivo y de la Comisión pone «al parecer», fuera del alcance de la ley el acto mismo de la celebración del matrimonio, dejando, «al parecer», que cada cual lo celebre en el modo y forma que mejor fuere de su agrado, asociándolo o no a las ceremonias de un culto cualquiera. El proyecto sólo exige que el matrimonio después de celebrado, o en el acto mismo de su celebración ante el escribano o notario, como pueden hacerlo los contrayentes si quisieren, se inscriba en el Registro Civil, previa constancia judicial de no haber impedimento legal que obste a su celebración.

De este único modo el matrimonio se tiene por legal, y entra a producir sus naturales efectos de ley por la inscripción en el Registro Civil y sólo desde la inscripción que le da el carácter de acto jurídico válido.

El proyecto desnaturaliza así la «institución social», y la transforma en mera «institución civil» o «jurídica» convirtiendo el matrimonio en mero hecho privado, en hecho puramente individual, en simple hecho o acto jurídico, nada más que «jurídico»; de donde procede la necesidad de la inscripción en el Registro Civil, para dar a ese acto privado o individual, carácter público y fecha cierta al contrato privado, que no se sabe cómo ni cuando se celebró, y que es indispensable tenga fecha cierta a los efectos del derecho.

Al Poder Ejecutivo, como a la Comisión que ha estudiado este proyecto, les importa poco saber cómo se celebró el acto. Es un acto puramente individual, puramente de conciencia: es un acto que no afecta a la sociedad, ni interesa la conciencia pública o la moral social. Es un acto meramente jurídico, un simple contrato, y a los que contratan privadamente, no se les va a preguntar dónde ni cómo celebraron el contrato, según se dice en el mensaje del Ejecutivo, y se repite por la Comisión en su informe. Lo único que se requiere es que el acto se inscriba para que adquiera así fecha cierta.

No se diga que yo tergiverso el concepto del Poder Ejecutivo y de la mayoría de la Comisión. Sostengo esta discusión con la mayor sinceridad; estoy defendiendo únicamente la verdad, y derramo ante el país mi conciencia

toda. No soy capaz de hacer la mínima sofisticación en la exposición de las razones que se han aducido, ni del sentido que en sí mismo tiene el proyecto que se discute.

El Poder Ejecutivo y la Comisión, preocupados del respeto que se merece la conciencia individual, aunque olvidando el que se debe a la conciencia pública, expresan en idénticos términos el sistema de la ley, diciendo el uno y repitiendo después la otra, lo siguiente:

«Los que crean que sólo se casan ante el oficial público encargado del Registro Civil, quedarían casados manifestando su voluntad de casarse y asentado el acto también con las formalidades que se exigen; de este modo se respeta la libertad de conciencia hermosa conquista de la civilización...»

¡Hermosa conquista del cristianismo! ¡Hermosa conquista de la religión!, digo yo.

¡He indicado y puedo demostrar que no hay libertad sin religión; que no hay libertad sin Dios!

¡Para la escuela materialista la libertad humana no existe! La voluntad humana es para ella una máquina que corre impulsada por la «fuerza» como la locomotora de un ferrocarril. Es una máquina delicada y perfectísima como la de un reloj. Díganlo Moleschot, Comte, Büchner, Husley, Lombroso y demás adeptos de las escuelas materialistas y positivistas en jurisprudencia, filosofía y demás ramos de la ciencia. Consúlteseles y ellos dirán que el libre albedrío no existe: que hay en las acciones humanas una fatalidad a que obedecen irremisiblemente; que el instinto es en ellas una fuerza que nos impulsa ciegamente. Lombroso dirá así, en materia criminal, que es necesario tomar en cuenta esta fatalidad de las acciones, procedentes de la complejión de nuestro organismo, que excluye la plena libertad del agente.

¡La libertad humana no se explica ante el materialismo y el positivismo!

Si el señor ministro pretendiese contestar estas afirmaciones, yo podría citar las doctrinas de estos autores.

Yo reivindico, pues, para la escuela espiritualista; yo reivindico para la religión; yo reivindico para el cristianismo que da nombre a nuestra civilización, el concepto que el señor ministro atribuye, en sentido diverso e indefinido, a la civilización en general.

¿Qué es la civilización? Pregunto yo. Es el conjunto de adelantos y progresos de un país con arreglo al principio informativo de todos ellos.

Hablar en este caso de civilización es hablar del cristianismo que trajo a estas playas salvajes de América, la cruz bendita del misionero y del conquistador, sin lo cual seríamos hasta hoy tribus salvajes.

Pero me distraigo, señor presidente. Trataba de demostrar, la inconstitucionalidad, contradicción y absurdidad del proyecto del Poder Ejecutivo, por sus propios fundamentos, y exponía las teorías del mensaje del Poder Ejecutivo, que dice así:

«De este modo se respeta la libertad de conciencia, hermosa conquista de la «civilización», y el Estado sabe lo que tiene derecho de saber: que los contrayentes son legalmente hábiles para casarse, y que se han casado.

«En los demás contratos para cuya validez la ley ha establecido la escritura pública como «forma esencial» para que queden concluidos, basta la habilidad de los contrayentes y la constancia del contrato en el registro público de un escribano.

«Exactamente lo mismo», sucederá con el matrimonio, si el proyecto adjunto merece vuestra sanción; pues, así como a aquéllos no se les pregunta dónde ni cómo «conviniere las cláusulas del contrato», así también a los que vayan a inscribir su matrimonio, no se les interrogará dónde ni cómo «se han casado», bastando la inscripción en el registro público, de la manifestación de «haberse casado».

«Tal es el «principio fundamental» — lo dice el Poder Ejecutivo no lo supongo yo — que sirve de base a este proyecto reclamado por «altas necesidades sociales», no las demuestra el Poder Ejecutivo ni las demostrará jamás el señor ministro: yo voy a demostrar todo lo contrario — que se sienten cada día con mayor viveza; formulado con el propósito de garantizar para el ejercicio de uno de los actos más trascendentales de la vida, la más amplia libertad de conciencia, amoldado en su espíritu, en su esencia y en sus fines a las solemnes declaraciones de la Constitución de la República.»

Yo protesto contra esta conclusión del mensaje, señor presidente. Este proyecto no está amoldado al texto ni al espíritu de la Constitución, como con ella misma he de demostrarlo.

Pero voy a anticipar, desde luego, una idea general que lo demuestra. La Constitución nacional, ¿es espiritualista, materialista o positivista? Si es lo primero está probado que este proyecto no responde a las solemnes declaraciones de la Constitución que es una ley espiritualista, religiosa, cristiana, católica, en su texto y en su espíritu.

Queda, pues, demostrado que este proyecto es manifiestamente inconstitucional y no puede concordar con aquella, desde que funda una ley de matrimonio que excluye de sí toda confesión religiosa, y trata de eliminar la influencia cristiana la influencia de la iglesia católica en el acto de la celebración del matrimonio y en su legislación civil.

Este proyecto y las teorías con que se pretende fundarlo, pugnan abiertamente con el texto mismo de la Constitución, y no necesito otra demostración.

Bien, señor presidente: de lo que queda expuesto resulta que en concepto del Poder Ejecutivo el matrimonio no es más que un acto jurídico, un acto privado, sujeto en todo a la ley de los contratos: para la Comisión como para el Poder Ejecutivo el matrimonio no es más que un contrato civil.

Fácil me sería demostrar, entonces, que este proyecto es contrario a la naturaleza misma del matrimonio: que él es contrario a la razón y a la libertad humana: que es contrario al carácter religioso y moral del hombre: que es contrario, en fin, a la sociabilidad humana.

Algo contrario a la naturaleza del matrimonio; algo contrario a las generosas expansiones y liberalidades del amor; algo frío como el egoísmo, como el personalismo, como el individualismo; algo sórdido como un interés pecuniario, como un interés apreciable en dinero, que es el solo y único objeto de los «contratos civiles»: algo como todo esto se descubre, desde luego, en este proyecto puramente privado, puramente convencional, meramente contractual como una locación de servicios, como una compraventa de caricias y de afectos!

Algo contrario a la naturaleza racional y moral del hombre; algo contrario a su carácter y naturaleza sociable; algo que degrada la especie humana y envilece nuestra civilización; algo así, se descubre, desde luego, en este matrimonio privado, sin Dios, sin religión, sin moral determinada; en este matrimonio «común a todos los hombres del mundo»!

Este no es, señor presidente, este no es el matrimonio de las ciudades; este es el matrimonio de las selvas, el matrimonio de los bosques!

Este no es el matrimonio de un pueblo culto y cristiano; este no es el matrimonio de los argentinos que se celebra con las formas más expresivas de nuestra sociabilidad, en medio de la familia, de los amigos, y de las relaciones de los esposos, en medio de sus felicitaciones y de sus obsequios; bajo la bóveda de nuestros

templos, en medio de las nubes del incienso, al pie de nuestros altares, y entre los acordes del órgano de nuestras iglesias!

Este es nuestro matrimonio, señor presidente, este el matrimonio de las ciudades y de los pueblos cultos!

Yo creo, entonces, haber demostrado, y poder así dejar establecido, que el matrimonio puramente privado y meramente jurídico, o civil, que el Poder Ejecutivo proyecta y del que pretende hacer un presente griego a la República, es contrario a la naturaleza misma del matrimonio.

El matrimonio, señor presidente, no es, no ha sido, no será jamás una institución puramente jurídica, una institución puramente «civil». El matrimonio no es de institución «humana» y no funda, por consiguiente, una institución meramente civil.

El matrimonio, origen de la familia, principio de la sociedad, es anterior a las instituciones civiles, es anterior a la misma sociedad civil.

El matrimonio tiene, así, una naturaleza peculiar y propia que se substrahe al «imperio» de las instituciones puramente civiles: que se substrahe a este «imperio» de la voluntad soberana del que manda; que se substrahe a este dominio de las leyes puramente civiles sobre el hombre, las cuales, si bien pueden y deben «declararlo» a los efectos del derecho privado de las naciones, no pueden, ni deben, ni podrán jamás «constituirlo» o «instituirlo» por sí mismas.

La prueba la tiene el señor ministro, que queriendo «constituir el matrimonio», reduciéndolo a la forma de un contrato escrito para su validez, ha tenido que reconocer su existencia antes de la escrituración, o de su inscripción en el Registro Civil, como acto independiente de la ley misma, y de la fórmula esencial en que pretendía encerrarlo.

Es que las leyes de Dios se resisten a la menuada voluntad del hombre, como se resisten las leyes de la naturaleza moral a los ataques de los espíritus audaces que pretenden sojuzgarlas!

El matrimonio, institución social por excelencia, a que la especie humana debe su conservación, no puede, señor presidente, no ha podido, no ha debido ser entregado a las vicisitudes de los tiempos, a la inestabilidad y fluctuaciones de la ley civil.

El matrimonio no ha podido ser librado al acaso; no ha podido quedar dependiente de las leyes civiles: el matrimonio encierra un designio providencial para la conservación de la es-

pecie humana: él revela en su institución la existencia de una providencia divina que lo gobierna y dirige.

A no ser esto así, ¿podría decirse cuál habría sido el destino de la especie humana en cuanto a su conservación? ¿A cuántas incertidumbres, a cuántas fluctuaciones habría estado sujeta?

El matrimonio por sí mismo tiene una naturaleza y leyes propias, leyes providenciales e inmutables que lo «constituyen», y que lo ponen fuera del alcance de las potestades de la tierra.

El matrimonio obedece, así, a las leyes providenciales e inmutables de Dios; se gobierna por las leyes que rigen al individuo y a la sociedad en el orden físico y moral, es decir, en el orden social; y es así de «institución divina».

Es por esto que el matrimonio ha sido en todo tiempo santificado por la religión.

Puede tomar nota el señor ministro, seguro que no sabrá contestar este aserto: «el matrimonio ha sido en todo tiempo santificado por la religión».

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — No tomaré nota si lo molesta al señor senador.

Sr. Pizarro. — Por el contrario, me agrada que así lo haga; y esto le demostrará la certidumbre que tengo de que no va a levantar esta verdad histórica. El señor ministro va a tener que reconocerla y convivir conmigo en ella.

En todo tiempo, señor presidente, en todos los siglos bajo todos los climas y latitudes, el matrimonio, contrato natural, contrato civil, sacramento de la ley de gracia, en todo tiempo ha sido santificado por la religión; y un día el patriarca, otro día el augur, han sido llamados a pronunciar la bendición nupcial que en los pueblos cristianos pronuncia hoy el ministro del evangelio: hoy en el cristianismo, como ayer en el paganismo, o en el judaísmo.

¿Puede contestar el señor ministro esta verdad? Pues esta es la historia de todos los tiempos, señor presidente, esta es la historia de todas las naciones que los siglos vienen dejando escrita con el polvo de los imperios y de sus distintas civilizaciones, sobre la superficie del globo.

No hay otra historia a este respecto; no la ha de inventar el señor ministro; no ha de poder contestar la verdad de estas observaciones.

Yo debo decir más todavía, señor presidente; yo debo decir que esta historia no ha debido ser otra, no ha podido ser otra.

El hombre es por su naturaleza, el hombre es en sí mismo un ser racional que natural y

espontáneamente invoca a Dios en las horas solemnes de su vida. El ateísmo es una negación, es una pura negación, nada hay de positivo en él, es una pura abstracción, y por lo mismo «no existe» en el orden de la naturaleza, como lo indicaba perfectamente el señor miembro informante de la minoría de la Comisión.

El ateísmo no existe en la naturaleza: podrá haber hombres irreligiosos, hombres que han llegado a sofocar la conciencia, pero no habrá verdaderos ateos, porque no hay hombres que no tengan conciencia; y esto basta para demostrar la existencia de Dios, y que el hombre es por su naturaleza un ser religioso.

El fenómeno de la conciencia no se explica sino por la existencia de Dios: por la racionalidad del alma humana; por su espiritualidad, por su inmortalidad.

El fenómeno de la conciencia no tiene explicación en la escuela del materialismo que niega la libertad humana; no tiene explicación en las sectas de diversas ramificaciones del materialismo.

El hombre, señor presidente, ser racional, ha conocido y ha creído en Dios en todo tiempo. La creencia en Dios es universal. La inteligencia humana ha descubierto a Dios en las propias obras de la creación, antes que la ciencia hablara por los labios del filósofo para enseñar a Lucilo esta verdad. La inteligencia humana ha visto a Dios en las obras de la creación, la conciencia humana le ha sentido agitarse dentro de sí misma, y la humanidad entera se ha dicho: Dios existe — está cerca de tí — está contigo — está en tu interior — *Deus est — prope est — tecum est — intus est!*

Es la frase de Séneca.

Por eso, señor presidente, el hombre, por eso todos los pueblos y naciones de la tierra, invocan a Dios en los días solemnes de su existencia, y por eso el patriarca, el pontífice, el augur; por eso el ministro del Evangelio y todos los que se han considerado ministros de la divinidad, han sido llamados en su hora, en su tiempo, en su momento histórico según la civilización de cada pueblo, a santificar el vínculo de la unión conyugal.

Yo no estudio ahora este asunto, señor presidente, del punto de vista concreto de determinada confesión religiosa. No quiero estudiarlo desde el punto de vista del dogma católico, desde el punto de vista de mi fe religiosa. Yo lo examino bajo el aspecto general de la historia y de una filosofía abstracta.

En el vértigo de las pasiones humanas la

noción de Dios ha podido obscurecerse, y se ha obscurecido, dando origen a innumerables sectas religiosas y sistemas filosóficos más o menos racionales, más o menos absurdos. Dejo de lado, en este momento, señor presidente, todos esos sistemas de filosofía y sectas de religión que los siglos arrastran constantemente en su corriente, sólo tomo de ellos el sedimento que nos dejan, para decir, que así como la humanidad no ha podido jamás alejar de su inteligencia la idea y el nombre de Dios, no ha podido tampoco arrancar de su conciencia el sentimiento moral de la institución divina del matrimonio; y que si un día la razón humana obscurecida por el error, se ha visto obligada, como en Delfos, a erigir sus templos a un Dios desconocido — *ignoto Deo* — cuya existencia no podía negar; otro día la conciencia humana, aun en medio de sus prevaricaciones, aun en medio de su perversión moral, y de la más espantosa disolución de las costumbres se ha sentido arrastrada por secreto impulso al pie de los altares, y se ha visto obligada a crear dioses y divinidades que presidan la celebración del matrimonio, como Himeneo, hijo de Baco y de Venus, en las ficciones de la mitología antigua.

Separad, señores senadores, de todos estos mitos y ficciones cuanto hay en ellos de estravagante y de absurdo, y en el fondo encontraréis siempre esta verdad de altísima enseñanza para nosotros: que el matrimonio, institución social por excelencia, ha sido en todo tiempo santificado por la religión.

El matrimonio, señor presidente, es así expresión genuina de las ideas morales y religiosas de los pueblos, refleja necesariamente su civilización, y es como el espejo de la moral y de las costumbres públicas.

No se puede, por lo tanto, fundar el matrimonio, como lo pretende el Poder Ejecutivo, y lo aconseja la Comisión, sobre la falsa base de una sociedad sin Dios, sin religión, sin moral. Esta base, que es la base del proyecto en discusión, es constitucional y socialmente falsa.

Este proyecto no responde así, ni a nuestra compleción social, ni a nuestra constitución política.

Señor presidente: yo puedo, yo creo que puedo, en una breve paráfrasis de las ideas fundamentales del proyecto, según la honrada exposición que de ellas he hecho, yo creo que en breve paráfrasis de esas ideas, puedo demostrar todo el fondo de inmoralidad que hay en él, y toda su deformidad constitucional.

Basta observar esto: basta observar que el Poder Ejecutivo y la Comisión establecen como

base del proyecto, el concepto de que las creencias religiosas son del dominio exclusivo de la conciencia individual.

El Poder Ejecutivo y la mayoría de la Comisión, olvidan que hay también una conciencia pública; que hay una conciencia social; que hay una voluntad nacional, que merecen respeto, y que, con arreglo a los principios de la Constitución, inspiran nuestras leyes, de suerte que ellas sean la expresión y el reflejo de la opinión y de la voluntad nacional.

Yo bien sé, señor presidente, que con arreglo a la Constitución, el pueblo no gobierna ni delibera sino por medio de sus representantes; pero sé también, señor presidente, que no somos los señores del pueblo, sino sus mandatarios y servidores: sé que no podemos imponer a la Nación nuestra voluntad, y que debemos respetar la suya.

Yo sé, señor presidente, que los pueblos no se han hecho para las leyes, sino las leyes para los pueblos; yo sé que los pueblos no se hacen para los presidentes y para los congresos, sino los congresos y los presidentes para los pueblos.

Yo sé, finalmente, que no se pueden hacer esta inversión de conceptos, esta imposición de la voluntad del Congreso y del presidente sobre la voluntad nacional, sobre las exigencias sociales, sobre la conciencia pública, sobre las costumbres, sobre la historia, sobre las tradiciones de la Nación, contrariando su civilización su ser, su complexión social; yo sé que no se puede hacer todo esto, sino invirtiendo nuestras instituciones políticas y después de haber declarado que la libertad constitucional ha muerto en la República.

Señor presidente: yo recuerdo en este momento, un ejemplo que el Honorable Senado y el señor ministro de justicia y culto, a quien me permito recordárselo, deberían tener presente.

En 1871, señor presidente, se discutía en el Parlamento inglés la moción de Miall, tendiente a modificar la situación de la iglesia oficial de Inglaterra. Era Gladstone su primer ministro.

La moción se fundaba con todos esos argumentos que se traen siempre, como lo ha hecho en parte el señor miembro informante de la mayoría de la Comisión, tendientes a establecer el concepto político de la separación de la Iglesia y del Estado.

Allí sí que había motivos para fundar una moción de este género; pero Gladstone que la impugnaba, cerró el debate con esta observación de verdadero estadista: «Los argumentos del orador exigirían volúmenes para tratar debidamente la materia. Cada uno de sus argumen-

tos exigiría un volumen a parte; pero toda disquisición teórica está de más en un cuerpo político, cuando se tiene el sentimiento de la oportunidad. La moción no responde a las ideas, a los sentimientos, a las tradiciones del país»; y la moción fué rechazada por trescientos y tantos votos!

No se explica, a la verdad, señor presidente, que la revolución social y constitucional a que aspira este proyecto, venga precisamente del poder encargado de mantener la Constitución y el orden social, y se inicie en los cuerpos conservadores del Estado.

Yo me explico este proyecto en el joven diputado por Corrientes, que ha presentado esta idea en todos sus desenvolvimientos a la Cámara de que forma parte. Eso es lo natural — es la juventud ávida de innovaciones; es la juventud que se apasiona por una idea nueva, que expone con sinceridad, y que abraza, con entusiasmo propio de la edad, un error y una doctrina falsa, que ella adopta sin maduro examen. Es el espíritu de iniciativa naciendo, al fin, de las corrientes populares, y presentándose en la Cámara que más directamente refleja los diversos matices de la opinión, de las pasiones, de las preocupaciones del pueblo. Es allí, donde únicamente puede iniciarse un pensamiento de esta clase; pero que él provenga del Poder Ejecutivo y que este proyecto se inicie precisamente en el Senado de la Nación, el cuerpo conservador por el carácter mismo de su institución, esto es lo que no puedo explicarme. ¿Acaso el Senado ha perdido ya hasta su significación política como cuerpo conservador en la Nación? Hasta en esto ha sido desgraciado y falto de suficiente consejo el Poder Ejecutivo, que precisamente ante el Senado, ante los ancianos o *seniores* de la Nación, ha creído deber traer este proyecto de reacción contra el orden constitucional y el estado social del país.

Y después de esto, señor presidente, ¿cómo funda el Poder Ejecutivo su proyecto? En nombre «de la más absoluta libertad de conciencia»; y es en verdad, «tan absoluta» esa libertad de conciencia, señor presidente, que llega hasta la «ineconciencia»; hasta negar la conciencia misma; hasta negar a Dios, sin el cual no se explica el fenómeno de la conciencia humana; fundando así un sistema de todo punto materialista en la ley que se proyecta.

Ya he dicho, señor presidente, que en este orden la conciencia humana no tiene explicación, y que la vida moral se explica sólo por el fatalismo del instinto y de la sensación. Las escuelas del materialismo tienen también su moral; pero es la moral instintiva, la moral

evolutiva o monística, la moral convencional, la moral del cálculo o del interés social; es decir, la moral del egoísmo, la moral de la «fuerza» que viene desenvolviéndose y transformando la materia: hasta la bestia se convierte en hombre social.

Esta es la moral que el Poder Ejecutivo trata de implantar entre nosotros: la moral independiente de toda confesión religiosa, la moral de los instintos; la moral de la sensación; la moral de la carne, la moral puramente animal.

¿No está demostrando todo esto, cómo el proyecto en discusión responde a un concepto de «fuerza», a un concepto alta y terriblemente naturalista, incompatible con el texto y el espíritu de la Constitución?

Esto significa en el fondo «la más absoluta libertad de conciencia» de que nos habla el Poder Ejecutivo; libertad tan absoluta, individual e independiente, repito, que llega hasta la negación de toda conciencia y de toda moral.

El Poder Ejecutivo parte así de un falso principio, que excluye necesariamente la influencia del principio cristiano, la influencia del principio religioso en la Constitución, en las leyes, en el derecho, en las manifestaciones todas de nuestra sociabilidad y de nuestra civilización.

El Poder Ejecutivo cree así, que con arreglo a la libertad de conciencia y de cultos que la Constitución consagra, el olimpo pagano puede fijar sus reales entre nosotros y los misterios de Eleusis substituir a los misterios de la cruz en los templos de la República. El Poder Ejecutivo entiende que bajo los auspicios de la más absoluta libertad de conciencia, puede llegar a ostentarse el famoso templo de Corinto en nuestra gran avenida de Mayo, o en nuestro gran parque de Palermo.

¿Es esto posible con arreglo a nuestra Constitución? ¿Es esto posible con arreglo al artículo de la Constitución que el Poder Ejecutivo comenta, y que precisamente establece todo lo contrario a sus teorías socialistas, cuando declara que la libertad de conciencia sólo alcanza a las «acciones privadas», pero no a los «hechos sociales» y sólo puede invocarse en cuanto tales acciones «no ofenden de modo alguno a la moral pública»?

Estas son las acciones que la Constitución declara exentas de la autoridad de los magistrados y reservadas «sólo a Dios», fundando así la «libertad civil» de conciencia, no la «libertad filosófica e individual», en materias morales.

El Poder Ejecutivo cree, sin embargo, que

una moral pagana y anticristiana, puede servir de principio informativo de nuestra civilización bajo los auspicios del olimpo pagano y de sus ceremonias y ritos religiosos. El cree que bajo los auspicios de la Constitución, puede desaparecer nuestra civilización cristiana y ser substituída por la civilización helénica, desapareciendo nuestros templos y los misterios de la cruz que en ellos se celebran, para dar lugar a los ritos y ceremonias del culto pagano, con sus sangrientos sacrificios de víctimas, que viniera a substituir el culto católico y el sacrificio incruento de nuestros altares!

Esto es lo que importa «la más absoluta libertad de conciencia», de que el Poder Ejecutivo nos habla y en cuyo nombre pretende fundar el proyecto en discusión.

No, señor presidente; el principio que sirve de base a este proyecto, es completamente falso. La Constitución garantiza para los argentinos y para los extranjeros que quieran habitar en nuestro suelo, la libertad de conciencia; pero libertad racional de conciencia, que es la única libertad, no el desenfreno y la licencia.

Autoriza la libertad de cultos; pero de cultos racionales, señor presidente, de cultos que concuerden con nuestra civilización cristiana.

Consiente y establece que la moral privada no sea objeto de investigación por parte de los poderes públicos, respetando el hogar y la conciencia; pero no consiente que la moral asiática se ostente socialmente en nuestras calles, con escándalo de la civilización y de la moral cristiana.

Cuando el Poder Ejecutivo establece que las creencias religiosas son del dominio de la conciencia individual, y pretende excluirlas de nuestra legislación, de nuestras costumbres sociales, olvida, como he dicho, que hay una conciencia social, una conciencia pública; olvida el carácter esencialmente social del principio religioso; olvida que el fondo de toda civilización es siempre una creencia religiosa que informa las manifestaciones todas de la vida nacional y que se traduce, necesariamente, en su legislación, en su literatura, en su derecho, en su moral, en el arte, en su comercio, en la paz, en la guerra, en sus relaciones internacionales, como en sus relaciones civiles, en la vida interior, como en la vida exterior de la Nación.

Todo esto debe respetar el extranjero entre nosotros, desde el momento de pisar el suelo argentino. Esta es la libertad que ofrecemos al extranjero. La libertad que gozan los pueblos cristianos, los pueblos cultos; no los pue-

blos salvajes y de civilización inferior a la nuestra en el orden moral e intelectual, aun cuando pudieran ser más adelantados en orden al progreso material.

La Constitución ha dado al extranjero los derechos civiles del ciudadano para que pueda casarse; pero para que pueda casarse «con arreglo a las leyes» de la Nación, señor presidente, y no según fuere de su agrado, y él crea que debe ser el matrimonio según su conciencia.

El que venga, pues, a formar un hogar al amparo de nuestras leyes, tiene que comenzar por someterse a ellas; y no se puede pretender en nombre del inmigrante, señor presidente, que el argentino disperse su hogar y su familia, trastornando su legislación civil del matrimonio, en obsequio de aquellos que sólo secundariamente pueden ser objeto de esta legislación, propia de los ciudadanos.

La Constitución nacional en su preámbulo asegura los beneficios de la libertad racional del hombre, con arreglo a los principios que ella funda y establece. Pero, ¿a quiénes asegura estos beneficios de la libertad? ¿Para quiénes trata de fundar esta libertad? La Constitución lo dice expresamente: «para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino.»

«Para nosotros», pues, en primer lugar; para nuestros hijos, para nuestra «posteridad», en segundo lugar; y en tercer lugar, para los demás hombres del mundo que quieran habitar entre nosotros.

Todo viene, así invertido en este proyecto, al acometer la reforma legislativa en interés, precisamente, de los que no son ciudadanos, en interés de todos aquellos que quieran venir de todas partes del mundo a habitar entre nosotros.

De esta suerte, señor presidente, se comienza por sacrificar nuestra soberanía política poniéndola al servicio del elemento extranjero, que es, y quiere permanecer extranjero en nuestro propio suelo.

Pero aquí es de observar que esta ley no responde ni a los intereses mismos de la inmigración extranjera. Esta es casi totalmente europea, y la civilización europea es cristiana. La inmigración europea no necesita, pues, de una ley atea para el matrimonio.

En este sentido la inmigración goza de la más amplia libertad que pudiera racionalmente descarse. La ley que actualmente rige el matrimonio ha dado en este punto la misma extensión que la Constitución nacional consagra

en materias religiosas: todos pueden adorar a Dios en los altares de su culto, y todos pueden bendecir su unión en los altares de su culto.

La Constitución nacional, que no ha consagrado el ateísmo como principio social, no ha consagrado tampoco el ateísmo como principio informativo del matrimonio.

Todos, pues, pueden casarse, según la legislación vigente, en el modo y forma que cuadre a su conciencia; en el modo y forma que mejor convenga a sus creencias; pero siempre que ellas no atenten a la moral social, ni a la civilización cristiana, que la Constitución se propone desarrollar en el suelo argentino.

Si no hemos, pues, de llegar a la absurda conclusión que el mensaje del Poder Ejecutivo insinúa, de que es menester renunciar a la civilización cristiana y derribar nuestros altares para substituirlos por una nueva civilización y un nuevo culto, o mejor dicho, para suprimir todo culto y toda civilización, quedando entregados al más completo materialismo; si no hemos de llegar a esta conclusión, basta y sobra con que se diga a todo ser racional, al tenor de nuestra legislación civil y política vigente, que tiene derecho de adorar a Dios en los altares de su culto y que puede casarse bajo los auspicios del dios de su culto, y con arreglo a sus ceremonias y a sus ritos, para que la libertad de casarse haya alcanzado su más completo desenvolvimiento racional y constitucional.

Pero en el mensaje del Poder Ejecutivo se hace la observación de que algunos no pueden casarse por no haber en el país sacerdotes del culto a que pertenecen. Dando a esta observación toda la trascendencia que se le quiera dar respecto al número de individuos que puedan presentarse en tales condiciones, resultaría de esta observación que es necesario invertir todo nuestro orden social, todo nuestro régimen constitucional y civil, para que tales individuos puedan casarse y tengan medios de celebrar su matrimonio sin la bendición del sacerdote que en su conciencia debería bendecir su unión.

Pero esta observación se funda en un simple hecho, que se exagera, y que no alcanza a justificar el proyecto en discusión. Después de todo, el inconveniente que se nota no procede de la ley vigente sobre matrimonio. Este inconveniente no es un inconveniente «de derecho» que nazca de dificultades creadas por la ley para la celebración del matrimonio, sino de un hecho que podrá o no podrá remediarse de cualquier otro modo. ¿No hay sacerdote de un

culto? ¿Y a mí qué me importa? ¿Acaso esto quiere decir que no hay libertad en el país?

Si no tiene sacerdote que bendiga su unión, costéelo, o no se case. ¿Por qué no vienen también a decirnos: no tengo mujer con quien casarme; deme el Estado mujer?

Esta es una dificultad «de hecho», señor presidente, que no puede servir para motivar el proyecto en discusión. ¿Cómo se pueden traer al Senado observaciones de este género, como fundamento racional para una reforma de tanta trascendencia como la que se proyecta?

Yo no me lo explico, señor presidente: esto para mí no tiene explicación posible.

Otra consideración que se aduce en el mensaje, para fundar este proyecto, es que todos los hombres tienen derecho a casarse. Indudablemente que todos tiene este derecho; pero no indistintamente, en todas partes, y con quien quieran, sino en su propia nación, y en cualquiera parte en que se lo permitan las leyes del país, y según esas mismas leyes lo dispusieran. El matrimonio es un derecho; pero desde el punto de vista que aquí lo consideramos, es un derecho de los ciudadanos. Es en este carácter que la Constitución lo reconoce a los

extranjeros cuando dice en uno de sus artículos que éstos gozan los derechos del ciudadano para «poder casarse conforme a las leyes». El derecho de casarse no puede invocarse como un derecho natural, o absoluto, del punto de vista de la legislación civil de las naciones, de suerte que todos los hombres del mundo puedan indistintamente casarse, invocando un derecho natural, contra las leyes del país que hartos liberales se muestran con ellos cuando les permiten contraer matrimonio en él.

Esto, señor presidente, es entre nosotros pura liberalidad de nuestra Constitución que permite al extranjero casarse a la par de los argentinos, con los argentinos, y entrando a formar con ellos la familia argentina.

Sr. Funes. — Si me permite, voy a interrumpirlo. El señor senador debe estar fatigado: la hora es avanzada y podríamos levantar la sesión.

Hago moción en este sentido.

—Suficientemente apoyada la moción, se vota y es aprobada.

—Se levanta la sesión siendo las 6 p. m.